



FGR

FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

COMITÉ DE
TRANSPARENCIA¹

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2019 5 DE MARZO DE 2019

¹ En términos de lo dispuesto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su DECLARATORIA de entrada en vigor que le confiere Autonomía Constitucional; así como en los artículos 1, 3, y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.



CONSIDERACIONES

Con motivo de las publicaciones de fecha 14 y 20 de diciembre de 2018 respectivamente en el Diario Oficial de la Federación, del Decreto de la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y de la DECLARATORIA de entrada en vigor de la Autonomía Constitucional de la Fiscalía General de la República; se desprende que dicha normativa tiene por objeto reglamentar la organización, funcionamiento y ejercicio de las atribuciones de la Fiscalía General de la República como **Órgano Público Autónomo**, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio a cargo de las funciones otorgadas al Ministerio Público de la Federación, de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte y demás disposiciones aplicables, y por la cual se abroga la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

En esa tesitura, en tanto se avanza en la transición orgánica de la Fiscalía General de la República, se debe tomar en consideración lo previsto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto aludido, que citan:

Sexto. Todas las referencias normativas a la Procuraduría General de la República o del Procurador General de la República, **se entenderán referidas a la Fiscalía General de la República o a su titular respectivamente, en los términos de sus funciones constitucionales vigentes.** Las referencias normativas a los agentes del Ministerio Público se entenderán referidas a las y los Fiscales en los términos de esta Ley.

Noveno. A partir de su nombramiento, la persona titular de la Fiscalía General de la República, contará con un plazo de un año para definir la estrategia de transición, a partir de la realización de un inventario integral y un diagnóstico de los recursos financieros, humanos y materiales, casos pendientes, procesos de colaboración e inteligencia y cualquier otro insumo que considere necesario para la integración de un Plan Estratégico de Transición. Priorizará en orden de importancia el establecimiento del Servicio Profesional de Carrera y su Estatuto, la consolidación del sistema de información y análisis estratégico para la función fiscal, **así como la reestructura y definición de los órganos administrativos** y los sustantivos para la función fiscal.

III. Estrategia específica respecto al **personal en activo** y al reclutamiento de nuevos talentos, que contemple a su vez esquemas de retiro, liquidación, certificación, capacitación, desarrollo y gestión del cambio;

IV. Estrategia para el **diseño y activación de la nueva estructura organizativa**; así como del proceso de cierre de las estructuras y procesos previos;

VI. Estrategia de transparencia, participación ciudadana y rendición de cuentas del proceso de transición que asegure la publicidad y mecanismos necesarios para el seguimiento, colaboración y vigilancia;



Décimo Segundo. El proceso de transición del personal de la Procuraduría General de la República a la Fiscalía General de la República se llevará a cabo de acuerdo con el Plan Estratégico de Transición y será coordinado por la Unidad a cargo. Este proceso deberá llevarse a cabo conforme a los siguientes lineamientos:

II. El personal adscrito a la Procuraduría General de la República que a la fecha de entrada en vigor del presente Decreto tenga nombramiento, continuará en la función que desempeña y tendrá derecho a participar en el proceso de elección para acceder al Servicio Profesional de Carrera de la Fiscalía General de la República **en términos de los principios establecidos en la presente Ley**. Para ello, se garantizará su acceso a los programas de formación, entrenamiento, fortalecimiento de capacidades y evaluación durante el periodo de transición, en los términos establecidos en los lineamientos provisionales;

Lo anterior, en correlación con el artículo 1, 3 y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República y el **Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia** de la Procuraduría General de la República, que señalan:

Artículo 1. El presente Reglamento tiene por objeto establecer la organización y el funcionamiento de la Procuraduría General de la República para el despacho de los asuntos que la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, su Ley Orgánica y otros ordenamientos encomiendan a la Institución, al Procurador General de la República y al Ministerio Público de la Federación.

Artículo 3. Para el cumplimiento de los asuntos competencia de la Procuraduría, de su Titular y del Ministerio Público de la Federación, **la Institución contará con las unidades administrativas** y órganos desconcentrados siguientes:

Cada Subprocuraduría, la Oficialía Mayor, la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, la Visitaduría General, cada Órgano Desconcentrado y **cada unidad administrativa especializada creada mediante Acuerdo del Procurador** contará con una coordinación administrativa que se encargará de atender los requerimientos de operación de las áreas bajo su adscripción, lo cual incluye la gestión de **recursos financieros, materiales y humanos**.

Artículo 6. Las facultades de los titulares de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, **se ejercerán por su conducto y por el personal a su cargo, de conformidad con las normas aplicables y lo que establezca el Procurador**.

La comunicación, actividades y flujo de información de las unidades administrativas y órganos desconcentrados a que se refiere el artículo 3 de este Reglamento, podrán realizarse mediante el uso de medios electrónicos, digitales u otra tecnología, de conformidad con los lineamientos que dicte el Procurador.

[illegible]

3



FGR
FISCALÍA GENERAL
DE LA REPÚBLICA

**COMITE DE
TRANSPARENCIA**

INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.

En términos de lo dispuesto en el Acuerdo A/072/2016 por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental de la Procuraduría General de la República y se conforma el Comité de Transparencia, en concordancia con el artículo 64, fracción II de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. (DOF., 9.V.2016).



Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León

Suplente del Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Responsable del Área Coordinadora de Archivos en la Dependencia.

En términos de lo dispuesto en los artículos 18, fracción VII y 66, fracción VIII, del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción I de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control en la Procuraduría General de la República.

En términos de lo dispuesto por los artículos 37 de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de julio de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016), publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de mayo de 2016; y 80 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el artículo 64, fracción III de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (DOF., 9.V.2016).



SEDE: Ciudad de México
Av. Insurgentes No. 20, Piso 8,
Col. Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc.
Auditorio 22 de octubre, Sección 2

PRESENTACIÓN

LISTA DE ASISTENCIA Y VERIFICACIÓN DE QUÓRUM

A las trece horas con diez minutos del martes cinco de marzo de dos mil diecinueve, en el Auditorio 22 de octubre, sección 2 del inmueble ubicado en la Avenida Insurgentes, número 20, Piso 8, Colonia Roma Norte, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México, la Secretaria Técnica del Comité de Transparencia verificó la asistencia de sus integrantes, encontrándose presentes la Presidenta del Comité de Transparencia; la representante del Área Coordinadora de Archivos y el representante del Órgano Interno de Control, por lo que de conformidad con los numerales Sexto y Séptimo del Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República, se da cuenta que hay quórum legal para sesionar.

Del mismo modo, se asienta que se encuentran presentes los enlaces de transparencia de las diversas unidades administrativas de los cuales queda evidencia con el registro autógrafo de su firma, en la lista de asistencia de la actual sesión.



DESARROLLO DE LA SESIÓN Y ACUERDOS

- I. **Lectura y en su caso aprobación del orden del día y aprobación del Acta de la Sesión inmediata anterior.**
- II. **Análisis y resolución de las solicitudes de acceso a la información y solicitudes de datos personales:**

A. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la inexistencia de la información requerida:

A.1. Folio 0001700033019 – RRA 1786/19

B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad de la información requerida:

- B.1. Folio 0001700033319
- B.2. Folio 0001700033419
- B.3. Folio 0001700038619
- B.4. Folio 0001700038719
- B.5. Folio 0001700040019
- B.6. Folio 0001700055119
- B.7. Folio 0001700058019
- B.8. Folio 0001700060919
- B.9. Folio 0001700062419
- B.10. Folio 0001700062519
- B.11. Folio 0001700062719
- B.12. Folio 0001700062819
- B.13. Folio 0001700063019
- B.14. Folio 0001700063719
- B.15. Folio 0001700064019
- B.16. Folio 0001700077819

C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública para proporcionar la información requerida;

- C.1. Folio 0001700036619
- C.2. Folio 0001700036919
- C.3. Folio 0001700037219

D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública para proporcionar la información requerida;

- D.1. Folio 0001700036219
- D.2. Folio 0001700051319



E.1.	Folio 0001700053819
E.2.	Folio 0001700054919
E.3.	Folio 0001700056819
E.4.	Folio 0001700057619
E.5.	Folio 0001700057719
E.6.	Folio 0001700059019
E.7.	Folio 0001700059919
E.8.	Folio 0001700060019
E.9.	Folio 0001700060319
E.10.	Folio 0001700060819
E.11.	Folio 0001700062619
E.12.	Folio 0001700062919

F.1.	Folio 0001700347018
F.2.	Folio 0001700002519
F.3.	Folio 0001700002619
F.4.	Folio 0001700002719
F.5.	Folio 0001700002819
F.6.	Folio 0001700002919
F.7.	Folio 0001700003019

III. Acuerdo por el cual se establece el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales prioritarias y solicitudes en donde se amplíe el término para dar respuesta.

[illegible]



ABREVIATURAS

FGR – Fiscalía General de la República.

OP – Oficina del C. Procurador General de la República.

SJAI – Subprocuraduría Jurídica y de Asuntos Internacionales.

SCRPPA – Subprocuraduría de Control Regional, Procedimientos Penales y Amparo.

SEIDO – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada.

SEIDF – Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delitos Federales.

SDHPDSC – Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.

AIC – Agencia de Investigación Criminal.

OM – Oficialía Mayor.

CAIA – Coordinación de Asuntos Internacionales y Agregadurías.

CGSP – Coordinación General de Servicios Periciales.

COPLADII – Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional.

CENAPI – Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia.

PFM – Policía Federal Ministerial.

FEADLE – Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos en contra de la Libertad de Expresión.

FEPADE – Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.

FEVIMTRA – Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas.

UEAF – Unidad Especializada en Análisis Financiero.

UTAG – Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental.

DGCS – Dirección General de Comunicación Social.

DGALEYN – Dirección General de Análisis Legislativo y Normatividad.

VG – Visitaduría General.

INAI – Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales.

LFTAIP – Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.

CFPP – Código Federal de Procedimientos Penales.

CNPP – Código Nacional de Procedimientos Penales.

CPEUM – Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Y Unidades Administrativas diversas y Órganos Desconcentrados descritos en el Acuerdo A/238/12, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, así como las contempladas en otras normativas aplicables.





A.1. Folio de la solicitud 0001700033019 – RRA 1786/19

La resolución para el presente asunto se encuentra al final del acta de la presente sesión.

[illegible]

f

10



B. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la reserva y/o confidencialidad de la información requerida:

B.1. Folio de la solicitud 0001700033319

Síntesis	Investigaciones en contra de servidores públicos o autoridades públicas.
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Confidencialidad de información pública (confidencial)

Contenido de la Solicitud:

"Solicito copias de la versión pública de averiguaciones previas y/o actas circunstanciadas, carpetas de investigación, abiertas del 1 de enero del año 2000 a la fecha contra el ex funcionario público Genaro García Luna, entre otros cargos ha sido secretario de seguridad pública federal. Solicito el número de averiguaciones previas, actas circunstanciadas y/o carpetas de investigación abiertas contra dicho ex funcionario Año por año del 1 de enero de 2000 a la fecha. Y solicito saber el status de cada una de dichas averiguaciones previas, actas circunstanciadas, carpetas de investigación." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Así mismo solicito saber si a raíz de las declaraciones hechas en Estados Unidos ante la Corte Federal de Brooklyn sobre los presuntos sobornos pagados por integrantes del Cartel de Sinaloa y/o los Beltrán Leyva están siendo investigados por la PGR" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0181/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar información que dé cuenta de la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentre inmersa la persona referida en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.



Exceptuando de lo anterior, únicamente aquella información que actualice las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:

Denuncias -respecto de las cuales este sujeto obligado ya haya notificado al imputado los hechos que se investigan - **por delitos cometidos por el servidor público en el ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del Código Penal, así como el estatus de las mismas es decir, si se encuentra / en trámite, en reserva, concluidas por el no ejercicio de la acción penal, consignada con proceso en trámite o concluido con sentencia irrevocable absolutoria (considerando que ya se emitió pronunciamiento de las concluidas, con sentencia condenatoria irrevocable), o bien, concluidas por la aplicación de un medio alternativo de solución de controversias.**

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.



Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

**CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

**CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor,



reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales. Inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás, consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. *El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.*



Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.



ARTÍCULO 20. *El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.*

1. A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.



B.2. Folio de la solicitud 0001700033419

Síntesis	Investigaciones en contra de servidores públicos y ex servidores públicos
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Clasificación de Información como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Solicito copias de la versión pública de averiguaciones previas y/o actas circunstanciadas, carpetas de investigación, abiertas del 1 de enero del año 2000 a la fecha contra el ex presidente Felipe Calderon Hinojosa. Solicito el número de averiguaciones previas, actas circunstanciadas y/o carpetas de investigación abiertas contra dicho ex funcionario Año por año del 1 de enero de 2000 a la fecha. Y solicito saber el status de cada una de dichas averiguaciones previas, actas circunstanciadas, carpetas de investigación." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Así mismo solicito la información relaciona sobre si a consecuencia, y/o raíz de las declaraciones hechas de noviembre pasado a la fecha durante el juicio de Joaquim Guzmán Loera en La corte federal de Brooklyn la PGR ha iniciado alguna averiguación previa y/o investigación sobre los presuntos sobornos recibidos por Felipe Calderón Hinojosa de integrantes del Cartel de Sinaloa." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0182/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar información que dé cuenta de la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentre inmersa la persona referida en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Exceptuando de lo anterior, únicamente aquella información que actualice las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de



Transparencia y Protección de Datos personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:

- ♦ **Indagatorias en general localizadas** en contra del servidor público de alto rango, electo democráticamente, **por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se deriven sentencias absolutorias o condenatorias firme**, es decir, que no sea procedente su impugnación por medio legal alguno, y
- ♦ Las **denuncias en general localizadas**, respecto de las cuales **ya se haya notificado al imputado** los hechos que se investigan por delitos cometidos por éste en el ejercicio del encargo (**conforme al Título Décimo del Código Penal Federal**), que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: en trámite; reserva; consignadas en proceso penal pendientes de resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción penal o terminadas por la aplicación de un medio alternativo de controversia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La **que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.**



Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

**CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

**CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el



decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. *El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes*



que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como 'reserva de información' o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.



ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

1. A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.



B.3. Folio de la solicitud 0001700038619

Síntesis

Investigaciones en contra de servidores públicos o ex servidores públicos

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Cuántas denuncias existen en contra del exgobernador de Veracruz Miguel Ángel Yunes Linares, nombre de las personas que las presentaron, en qué fecha fueron presentadas, por cuáles delitos se le acusa y en qué estatus se encuentran cada una." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF, DGCS, CAIA, SEIDO, UEAF, FEPADE, SCRPPA y SEIDF.**

ACUERDO

CT/ACDO/0183/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar información que dé cuenta de la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentre inmersa la persona referida en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Exceptuando de lo anterior, únicamente aquella información que actualice las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:

- ♦ **Indagatorias en general localizadas** en contra del servidor público de alto rango, electo democráticamente, **por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se deriven sentencias absolutorias o condenatorias**



firme, es decir, que no sea procedente su impugnación por medio legal alguno, y

- ♦ Las **denuncias en general localizadas**, respecto de las cuales **ya se haya notificado al imputado** los hechos que se investigan por delitos cometidos por éste en el ejercicio del encargo (**conforme al Título Décimo del Código Penal Federal**), que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: en trámite; reserva; consignadas en proceso penal pendientes de resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción penal o terminadas por la aplicación de un medio alternativo de controversia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La **que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte.



III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito



160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que



en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN, SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.



ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

A full page of graph paper with a uniform grid of small squares. The grid covers the entire area of the page, leaving no margins. The lines are thin and black, creating a pattern of small, identical squares across the entire surface.



B.4. Folio de la solicitud 0001700038719

Síntesis

Investigaciones en contra de servidores públicos o ex servidores públicos.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como confidencial.

Contenido de la Solicitud:

"Procuraduría General de la República (PGR)
Unidad de Enlace

Por medio de esta solicitud y en apego a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, requiero se me proporcione la siguiente información:

•¿Cuántas denuncias y/o demandas de tipo penal existen en contra de Carlos Romero Deschamps, -secretario general del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana- que hayan o no procedido, de 1996 a la fecha?

•Descripción de cada uno de los delitos por los que se le ha denunciado.

*•¿Existe alguna averiguación previa abierta o en curso en contra de Carlos Romero Deschamps?"
(Sic)*

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0184/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar información que dé cuenta de la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentre inmersa la persona referida en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.



Exceptuando de lo anterior, únicamente aquella información que actualice las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:

Denuncias -respecto de las cuales este sujeto obligado ya haya notificado al imputado los hechos que se investigan - **por delitos cometidos por el servidor público en el ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del Código Penal**, así como el estatus de las mismas es decir, si se encuentra / en trámite, en reserva, concluidas por el no ejercicio de la acción penal, consignada con proceso en trámite o concluido con sentencia irrevocable absolutoria (considerando que ya se emitió pronunciamiento de las concluidas, con sentencia condenatoria irrevocable), o bien, concluidas por la aplicación de un medio alternativo de solución de controversias.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:



TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

**CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

**CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO**

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:



Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.

Tomo: XIV, Septiembre de 2001

Tesis: I.3o.C.244 C

Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto



se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:



l. A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

A full page of graph paper with a uniform grid of small squares. The grid covers most of the page, leaving margins at the top, bottom, and sides. In the bottom right corner, there are some faint, handwritten blue markings that appear to be a stylized signature or initials.

34



A.5. Folio de la solicitud 0001700040019

Síntesis

Procesos administrativos, penales o disciplinarios, en contra de un servidor público.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Buenas tardes,

Por medio de la presente solicito acceso al expediente del caso del ataque cibernético perpetrado al servicio de transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos Interbancarios (SPEI) que, de acuerdo con varias notas periodísticas, esta siendo investigado por la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT) de la Procuraduría General de la República. <https://www.gob.mx/pgr/prensa/comunicado-500-18-pgr-colabora-en-la-investigacion-a-las-afectaciones-en-el-servicio-de-transferencias-electronicas-spei> Saludos" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **AIC**.

ACUERDO

CT/ACDO/0185/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva invocada por la Unidad de Investigaciones Cibernéticas y Operaciones Tecnológicas (UICOT) adscrita a la AIC, respecto del expediente requerido por el solicitante, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción VII de la LFTAIP, hasta por un periodo de cinco años, en relación con el numeral Vigésimo Sexto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la Elaboración de Versiones Públicas, que dispone que podrá actualizarse el supuesto de reserva, cuando la divulgación de la información obstruya la prevención de delitos al obstaculizar las acciones implementadas por las autoridades para evitar su comisión, o menoscabar o limitar la capacidad de las autoridades para evitar la comisión de delitos; así como cuando se cause un



perjuicio a las actividades de persecución de los delitos, al actualizarse la existencia de un proceso penal en sustanciación o una carpeta de investigación en trámite; que se acredite el vínculo que existe entre la información solicitada y la carpeta de investigación, o el proceso penal, según sea el caso, y que la difusión de la información pueda impedir u obstruir las funciones que ejerce el Ministerio Público o su equivalente durante la etapa de investigación o ante los tribunales judiciales con motivo del ejercicio de la acción penal.

Siendo así, a fin de brindar una justificación a la causal de clasificación señalada, se emite la siguiente prueba de daño:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable: El publicar la información relacionada con el "...expediente del caso del ataque cibernético perpetrado al servicio de transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos (SPEI)...", implicaría proporcionar información que forma parte de una investigación vigente y, por tanto, se estaría obstruyendo la investigación y correcta persecución de los delitos, así como las acciones implementadas para continuar con su comisión, al llegar a manos de personas vinculadas con la delincuencia, pudiendo vulnerarse las estrategias implementadas, o destruirse los medios de prueba recolectados, inclusive extraerse de la acción de la justicia los responsables de dichos actos.
- II. Perjuicio que supera el interés público: El riesgo de perjuicio que supondría la divulgación de la información solicitada "...expediente del caso del ataque cibernético perpetrado al servicio de transferencias del Sistema de Pagos Electrónicos interbancarios (SPEI)...", rebasa el interés público de que se dé a conocer su contenido, toda vez que al tratarse de una investigación en curso, que se encuentra en la etapa de investigación, en la cual se están reuniendo los indicios para el esclarecimiento de los hechos, el difundir información relevante pudiera alterar las líneas de investigación para dar con el o los presuntos responsables de la comisión del delito.

Por lo anterior, es viable el riesgo de perjuicio que se pudiese ocasionar a las acciones que realiza la UICOT, si se llegase a proporcionar la información solicitada, ya que se podría causar una afectación a la investigación, la cual tiene como finalidad la de identificar la vulnerabilidad, los vectores de ataque y el modus operandi de los posibles involucrados en las transferencias electrónicas ilegítimas de la Plataforma del SPEI; traduciéndose lo anterior en solventar un interés particular, sobre un interés general en favor de la sociedad.

- III. EL reservar la información solicitada, resulta ser el medio menos restrictivo para evitar un perjuicio, ya que al reservarse la información se está velando por la procuración de justicia, evitando la alteración de líneas de investigación del delito que pudieran afectar a las instituciones financieras, clientes, empleados y otras entidades con las que operan, principalmente los participantes del SPEI y en general del sistema financiero mexicano.



B.6. Folio de la solicitud 0001700055119

Síntesis

Investigaciones en contra de servidores públicos o ex servidores públicos.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Calificación de información: Estricta confidencial

Contenido de la Solicitud:

"¿Existe alguna o algunas carpetas de investigación contra Miguel Ángel Yunes Linares?, ¿por qué delitos?" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF, DGCS, CAIA, SEIDO, UEAF, FEPADE, SCRPPA y SEIDF.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0186/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentre inmersa la persona referida en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Exceptuando de lo anterior, únicamente aquella información que actualice las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:

- ♦ **Indagatorias en general localizadas** en contra del servidor público de alto rango, electo democráticamente, **por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se deriven sentencias absolutorias o condenatorias firme**, es decir, que no sea procedente su impugnación por medio legal alguno, y



- ♦ Las **denuncias en general localizadas**, respecto de las cuales **ya se haya notificado al imputado** los hechos que se investigan por delitos cometidos por éste en el ejercicio del encargo (**conforme al Título Décimo del Código Penal Federal**), que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: en trámite; reserva; consignadas en proceso penal pendientes de resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción penal o terminadas por la aplicación de un medio alternativo de controversia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La **que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los **secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal** cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.



En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)
Décima Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036



DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.30.C.244 C
Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.



Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.



Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. Principio de presunción de inocencia

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

Área con líneas horizontales para el desarrollo del texto.



B.7. Folio de la solicitud 0001700058019

Síntesis

Investigaciones en contra de servidores públicos o ex servidores públicos.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Indicar si existen o no investigaciones y bloqueos relacionados con cuentas bancarias de los funcionarios públicos difuntos Martha Erika Alonso Hidalgo y Rafael Moreno Valle Rosas o, en su caso, con cuentas de personas que tengan un estrecho vínculo con los mencionados occisos. Si la respuesta es afirmativa, señalar la cantidad y montos de esas cuentas, el estado de esas investigaciones, así como el procedimiento establecido para el caso de fallecimientos de individuos investigados o sancionados por lavado de dinero, financiamiento al terrorismo u otra causa similar.." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UEAF, SEIDF, DGCS, CAIA, SEIDO, SDHPDSC, FEPADE, SCRPPA y SEIDF y UTAG.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0187/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar información que dé cuenta de la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentren inmersas las personas referidas en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Exceptuando de lo anterior, únicamente aquella información que actualice las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:

- ♦ **Indagatorias en general localizadas** en contra del servidor público de alto rango, efecto



democráticamente, **por conductas cometidas en ejercicio de sus funciones, cuando de las mismas se deriven sentencias absolutorias o condenatorias firme**, es decir, que no sea procedente su impugnación por medio legal alguno, y

- ♦ Las **denuncias en general localizadas**, respecto de las cuales **ya se haya notificado al imputado** los hechos que se investigan por delitos cometidos por éste en el ejercicio del encargo (**conforme al Título Décimo del Código Penal Federal**), que se encuentren en alguno de los siguientes supuestos: en trámite; reserva; consignadas en proceso penal pendientes de resolver; concluidas, por el no ejercicio de la acción penal o terminadas por la aplicación de un medio alternativo de controversia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La **que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;**

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;



- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.3o.C. J/71 (ga.)



Décima Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012. Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han



tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.



B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presume su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. **Principio de presunción de inocencia**

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.



B.8. Folio de la solicitud 0001700060919

Síntesis

Investigaciones en contra de servidores públicos o ex servidores públicos;

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"ocurrimos a solicitar información respecto al estado, así como de los resultados y/ o avances derivados de las investigaciones en curso o abiertas en materia de corrupción contra C. CARLOS ROMERO DESCHAMPS, Líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Petróleos de la República Mexicana (STPRM), C. EMILIO LOZOYA AUSTIN, Exdirector General de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y C. JOSÉ ANTONIO GONZÁLEZ ANA YA Exdirector de Petróleos Mexicanos (PEMEXJ...) (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

ACUERDO

CT/ACDO/0188/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentren inmersas las personas referidas en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con las personas aludidas en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:



TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable:

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma**, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO II



DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

Tesis: I.30.C. J/71 (9a.)

Décima Época

Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tribunales Colegiados de Circuito

160425 1 de 3

Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada

Novena Época



*Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito,
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

*Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74*

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información".



o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. **Principio de presunción de inocencia**

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.



B.9. Folio de la solicitud 0001700062419

Síntesis

Investigaciones en torno al homicidio de Luis
Donaldo Colosio Murrieta

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como reservada

Contenido de la Solicitud:

"*Solicitudes de información * Sujeto obligado: PGR Con fundamento en los artículos tercero, sexto y demás que resulten aplicables de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y su Reglamento, solicito respetuosamente a ustedes, de las investigaciones en torno al homicidio de Luis Donaldo Colosio Murrieta solicito la siguiente información: Copia del Videocasete denominado "Mario Aburto Martínez (Declaración) 23/Mar/94". El contenido de este videocasete es descrito en el Informe de la Subprocuraduría Especial para el caso Colosio, Tomo I, publicado en el año 2000 el cual en su página 475 describe: "También se cuenta con el videocasete marca Sony, formato VHS, identificado con las leyendas "HS. KODAK VIDEOCASSETE" o "Mario Aburto Martínez (Declaración) 23/marzo/94".*" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

ACUERDO

CT/ACDO/0189/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de los documentos contenidos en la averiguación previa **SE/003/95**, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, en virtud de que la misma se encuentra en estatus de reserva de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del CFPP que señala que si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la policía



que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

Por lo que, de conformidad con la fracción XII, artículo 110 de la LFTAIP, este Órgano de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva en materia de transparencia, hasta por un periodo de cinco años de la indagatoria en comento, por lo que, a fin de reforzar la justificación de la causal de clasificación señalada, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar información podría alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante los Órganos Jurisdiccionales competentes o de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la averiguación previa por falta de elementos.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación está recopilando y que en su caso pondría a consideración del Juez para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia. Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social, -----



B.10. Folio de la solicitud 0001700062519

Síntesis	Investigaciones en torno al homicidio de <u>Luis Donaldo Colosio Murrieta</u>
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Clasificación de información como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Solicito atentamente las grabaciones de las siguientes conferencias: Conferencia PGR 25 de noviembre de 1994 Conferencia Senadores PGR 11 de octubre de 1994 Estas se realizaron durante las gestiones de la Subprocuraduría Especial para las Investigaciones en torno al Homicidio del Licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta a cargo de la entonces subprocuradora especial Olga Islas." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0190/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de los documentos contenidos en la averiguación previa **SE/003/95**, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, en virtud de que la misma se encuentra en estatus de reserva de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del CFPP que señala que si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

Por lo que, de conformidad con la fracción XII, artículo 110 de la LFTAIP, este Órgano de Transparencia **confirma** la



clasificación de reserva en materia de transparencia, hasta por un periodo de cinco años de la indagatoria en comento, por lo que, a fin de reforzar la justificación de la causal de clasificación señalada, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se exponería la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar información podría alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante los Órganos Jurisdiccionales competentes o de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la averiguación previa por falta de elementos.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación está recopilando y que en su caso pondría a consideración del Juez para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia. Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.



B.11. Folio de la solicitud 0001700062719

Síntesis

Investigaciones en contra de servidores públicos o ex servidores públicos.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Solicito información de Jesús Porcayo Calderón: Procesos penales (iniciados, en proceso o concluidos) Estatus laboral en el Instituto Tecnológico de Zacatepec y el Instituto de Investigaciones eléctricas (Cuernavaca) en el 2005, 2006 y 2007 y contribuciones fiscales." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"CURP: (...) RFC: (...) (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF y UTAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0191/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional respecto de afirmar o negar información que dé cuenta de la existencia o no de alguna línea de investigación en donde se encuentre inmersa la persona referida en la petición, en términos del artículo 113, fracción I de la LFTAIP.

Exceptuando de lo anterior, únicamente aquella información que actualice las hipótesis emitidas en los criterios resueltos por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos personales (INAI), los cuales medularmente consisten en lo siguiente:

Denuncias -respecto de las cuales este sujeto obligado ya haya notificado al imputado los hechos que se investigan - **por delitos cometidos**



por el servidor público en el ejercicio del encargo (conforme al Título Décimo del Código Penal, así como el estatus de las mismas es decir, si se encuentra / en trámite, en reserva, concluidas por el no ejercicio de la acción penal, consignada con proceso en trámite o concluido con sentencia irrevocable absolutoria (considerando que ya se emitió pronunciamiento de las concluidas, con sentencia condenatoria irrevocable), o bien, concluidas por la aplicación de un medio alternativo de solución de controversias.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con la persona aludida en la petición, se encontraría directamente relacionada con la afectación a su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.



En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.

Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.30.C. J/71 (9a.)
Décima Época
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.



El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada
Novena Época
Semana Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos



de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000
Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como 'reserva de información' o 'secreto burocrático'. En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.
B. De los derechos de toda persona imputada:
I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. **Principio de presunción de inocencia**



Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.

Área con líneas horizontales para el desarrollo del texto.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



B.12. Folio de la solicitud 0001700062819

Síntesis	Investigaciones en torno al homicidio de Luis Donald Colosio Marrieta
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Clasificación de información como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Con base en mi derecho a la información, solicito conocer los videos de los interrogatorios que se le han hecho a Mario Aburto Martínez, desde el 23 de marzo de 1994 a marzo de 1999. Gracias."
(Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0192/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de los documentos contenidos en la averiguación previa **SE/003/95**, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, en virtud de que la misma se encuentra en estatus de reserva de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del CFPP que señala que si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

Por lo que, de conformidad con la fracción XII, artículo 110 de la LFTAIP, este Órgano de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva en materia de transparencia, hasta por un periodo de cinco años de la indagatoria en



comento, por lo que, a fin de reforzar la justificación de la causal de clasificación señalada, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar información podría alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante los Órganos Jurisdiccionales competentes o de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la averiguación previa por falta de elementos.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación está recopilando y que en su caso pondría a consideración del Juez para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia. Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.



B.13. Folio de la solicitud 0001700063019

Síntesis

investigaciones en torno al homicidio de Luis
Donaldo Colosio Murrieta

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como reservada

Contenido de la Solicitud:

"1.-Información acerca de la existencia de protocolos o manuales de investigación en materia de recolección y análisis de huellas dactilares.

2.Información acerca de la existencia de protocolos o manuales de investigación en materia de recolección y análisis de voz." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **CGSP**.

ACUERDO

CT/ACDO/0193/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de las documentales que se enlistan a continuación correspondientes a protocolos y/o manuales en materia de recolección y análisis de huellas dactilares y de voz, de conformidad con lo previsto en las fracciones V y VII, artículo 110 de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.

- ♦ Protocolo de actuación de lofoscopia, en el cual aparecen los procedimientos de rastreos de huellas lofoscopias latentes en objetos diversos, así como el revelado de huellas latentes y levantamiento de fragmentos lofoscopicos.
- ♦ Protocolo de Análisis de voz.
- ♦ Manual de técnicas de dactiloscopia forense.
- ♦ Técnicas de análisis de voz.

Ello en virtud, de que los documentos antes citados, son de observación para los peritos de la CGSP, en los cuales se establecen las bases para la elaboración de dictámenes periciales, contemplando los procesos involucrados en el Sistema de Gestión de Calidad, por lo que atendiendo la sensibilidad que implica el contenido de los documentos y a su uso interno se



considera como información reservada y se debe asegurar que sólo el personal a que se refiere este instrumento tenga acceso a la misma en el ámbito de su competencia.

No obstante, a fin de recabar una justificación que contenga los elementos suficientes para reforzar la clasificación de la información requerida, se emite la siguiente prueba de daño:

Artículo 110, fracción V:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. Con la publicación de cualquier dato que se encuentre contenido en los protocolos, manuales y técnicas en comento, inherente a los peritos adscritos a la CGSP, pondría en riesgo la vida, seguridad o salud de los mismos, incluso la de su familia, ya que la apertura de ese tipo de información conlleva la posibilidad de que personas que pertenezcan a la delincuencia al conocer dicha información, obtengan a través de la coacción, la consecución de indicios probatorios que servirán para acreditar la comisión de un delito.
- II. Perjuicio que supera el interés público. Esta Institución tiene como misión contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante la investigación y persecución de diversos delitos a nivel federal, en colaboración con instituciones de los tres órdenes de gobierno y al servicio de la sociedad, por lo que proporcionar los datos personales del personal pericial, vulnera las actividades del Ministerio Público Federal, siendo la principal, la persecución e investigación de los delitos, por lo cual entregar las documentales, no garantizaría el cumplimiento al "interés público" y/o el derecho a la información, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a ese pequeño grupo y esta Fiscalía se debe a la sociedad en su totalidad, cumpliendo con la función sustancial de investigación y persecución de diversos delitos a nivel federal.
- III. Principio de proporcionalidad. Resulta necesario reservar información inherente al personal sustantivo de esta Institución, en este caso de los peritos, sin que ello signifique un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda vez que la divulgación de su contenido produciría un daño mayor en detrimento de la procuración de justicia ocasionando así un serio perjuicio a la sociedad: toda vez que se revelarían datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción de la Institución.

Artículo 110, fracción VII:

- I. Riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público. En virtud de que es información vigente, por lo cual su difusión menoscabaría las actividades de investigación y persecución de delitos federales e implicaría revelar procedimientos de actuación pericial. Asimismo, al hacer del conocimiento público el contenido de los manuales, protocolos, y técnicas, se ponen en riesgo las actividades que se llevan a cabo por parte de los peritos, ya que el mismo representa un instrumento de carácter exclusivamente técnico y representa una herramienta que sirve de apoyo al



personal pericial, por lo tanto, dadas las funciones y la naturaleza de los Servicios Periciales, se causaría perjuicio en las actividades de persecución de los delitos, ya que el personal pericial funge como auxiliar del Ministerio Público, lo cual implica que la investigación de indicios y elementos de prueba para la acreditación del delito a petición del Ministerio Público de la Federación, se ponga en riesgo la seguridad pública, en los términos de las leyes en la materia; asimismo, se dejaría vulnerable la capacidad de acción de los peritos si la información es conocida por delincuentes.

- II. Perjuicio que supera el interés público. Se pondría en riesgo la actividad de los peritos en la materia, toda vez que dar a conocer la información sensible referente a los Manuales, Protocolos y Técnicas, entorpecería la persecución de los delitos, en virtud de que pondría en ventaja a grupos delictivos o cualquier otra persona no autorizada, adelantándose al resultado de las actuaciones del Ministerio Público, con lo que dichos resultados podían verse afectados, causando un daño irreversible a la sociedad y afectando también la misión que tiene la Institución de contribuir a garantizar el Estado democrático de Derecho mediante la investigación y persecución de diversos delitos del fuero federal.
- III. Principio de proporcionalidad. Se vulnerarían las actividades de prevención o persecución de los delitos, pues se impediría u obstaculizaría las acciones o medidas implementadas para evitar la comisión de estos, o bien las atribuciones que ejerce este Ministerio Público Federal a través de los peritos en las diversas materias, dentro de las averiguaciones previas o carpetas de investigación, por lo que el reservar los Manuales, Protocolos y Técnicas, con que cuenta la CGSP, no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, toda vez que la divulgación de su contenido produciría un daño mayor en detrimento de la procuración de justicia ocasionando así un serio perjuicio a la sociedad: toda vez que se revelarían datos que pudieran ser aprovechados para conocer la capacidad de reacción e investigación de esta Fiscalía.



B.14. Folio de la solicitud 0001700063719

Síntesis

Investigaciones en torno al homicidio de Luis
Donaldo Colosio Murrieta

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Solicito por favor copia del material denominado "Declaraciones Mario Aburto" o "Microaudiocasete marca Sony MC-60 número de serie A1514255. La existencia de esta información puede corroborarse en el Informe de la investigación del homicidio del licenciado Luis Donaldo Colosio Murrieta, tomo II página 179.." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**,

ACUERDO

CT/ACDO/0194/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de los documentos contenidos en la averiguación previa **SE/003/95**, en términos de lo previsto en el artículo 110, fracción XII de la LFTAIP, en virtud de que la misma se encuentra en estatus de reserva de conformidad con lo previsto en el artículo 131 del CFPP que señala que si de las diligencias practicadas no resultan elementos bastantes para hacer la consignación a los tribunales y no aparece que se puedan practicar otras, pero con posterioridad pudieran allegarse datos para proseguir la averiguación, se reservará el expediente hasta que aparezcan esos datos, y entre tanto se ordenará a la policía que haga investigaciones tendientes a lograr el esclarecimiento de los hechos.

Por lo que, de conformidad con la fracción XII, artículo 110 de la LFTAIP, este Órgano de Transparencia **confirma** la clasificación de reserva en materia de transparencia, hasta



por un periodo de cinco años de la indagatoria en comento, por lo que, a fin de reforzar la justificación de la causal de clasificación señalada, es que se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Es un riesgo real, toda vez que revelar información inmersa en una averiguación previa menoscabaría las facultades de reacción e investigación a cargo del Ministerio Público de la Federación, afectando con ello las líneas de posibles investigaciones en contra de miembros de la delincuencia, así como disminuir la capacidad para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el Órgano Jurisdiccional competente; un riesgo es demostrable, ya que al otorgar la información de su interés se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República, en virtud que al entregar información podría alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado; y un riesgo identificable derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una carpeta de investigación en trámite que al ser difundida deja expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante los Órganos Jurisdiccionales competentes o de resolver el no ejercicio de la acción penal o, en su caso, la reserva de la averiguación previa por falta de elementos.
- II. Existe un perjuicio que supera el interés público, ya que al hacerse públicos los elementos que el Agente del Ministerio Público de la Federación está recopilando y que en su caso pondría a consideración del Juez para determinar la culpabilidad o no del o de los probables responsables, podrían alterarse los medios de prueba recopilados, el cuerpo del delito, o incluso, sustraerse de la acción de la justicia. Además, tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos; proporcionar la información requerida vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a una persona.
- III. En cuanto al principio de proporcionalidad, el reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información pública, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social así como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.



B.15. Folio de la solicitud 0001700064019

Síntesis

Investigación en trámite
FED/SEIDF/UNAI-MOR/1212/2018

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Se expida en mi favor copia simple de las entrevistas ministeriales presentadas por escrito por las persona imputadas dentro de la carpeta de investigación número FED/SEIDF/UNAI-MOR/1212/2018, radicada ante la UNIDAD DE ATENCIÓN INMEDIATA, DE LA UNIDAD ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS CONTRA EL AMBIENTE Y PREVISTOS EN LEYES ESPECIALES, DE LA SUBPROCURADURÍA ESPECIALIZADA EN INVESTIGACIÓN DE DELITOS FEDERALES, DE LA FISCALÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA." (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"(...), AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SEIDF**.

ACUERDO

CT/ACDO/0195/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la clasificación de reserva de la carpeta de investigación aludida por el particular que se encuentra en trámite e integración ante el Ministerio Público de la Unidad Especializada en Delitos Contra el Ambiente y Previstos en Leyes Especiales, adscrita a la **SEIDF**, por actualizar el supuesto contenido en la **fracción XII, artículo 110** de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.

Por lo que a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación señala, se expone la siguiente prueba de daño:



- I. **Riesgo real, demostrable e identificable:** Es un riesgo real, toda vez, que dar a conocer la información inmersa en indagatorias se expondrían las averiguaciones llevadas a cabo por el Ministerio Público de la Federación, en las cuales se reúnen los indicios para el esclarecimiento de los hechos y en su caso los datos de prueba para sustentar el ejercicio o no de la acción penal y la probable responsabilidad del indiciado, a efecto de consignar la acción penal ante el órgano jurisdiccional competente, es un riesgo demostrable, ya que el otorgar la información solicitada se expondría la eficacia de esta Fiscalía General de la República; y es un riesgo identificable, derivado que la información solicitada se encuentra relacionada con una indagatoria en trámite y en caso de ser difundida, dejaría expuesta información sobre la capacidad para llevar a cabo las diligencias e investigaciones respectivas para allegarse de los elementos necesarios para comprobar, en su caso, el cuerpo del delito y la probable responsabilidad del mismo.
- II. **Perjuicio que supera el interés público:** Tomando en consideración que una de las misiones de esta Institución es garantizar el Estado democrático de derecho y preservar el cumplimiento irrestricto de la CPEUM, mediante una procuración de justicia eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto irrestricto a los derechos humanos; proporcionar información inmersa en indagatorias, vulneraría el interés público, ya que el beneficio se limitaría única y exclusivamente a su petición, en donde en todo caso, prevalecería el interés particular sobre el interés general. En ese sentido, tomando en consideración que esta Institución se debe a la sociedad en su totalidad, se debe cumplir con su función sustancial consistente en la investigación y persecución de los delitos.
- III. **Principio de proporcionalidad:** EL reservar la información solicitada no significa un medio restrictivo de acceso a la información pública, pues la reserva invocada obedece a la normatividad en materia de acceso a la información, asimismo realizando un ejercicio de ponderación es claro que la investigación y persecución de los delitos es de interés social, sí como la imposición de sanciones por la comisión de los mismos, por lo que al divulgar lo relacionado con investigaciones que se tramitan ante el Ministerio Público, únicamente se velaría por un interés particular omitiendo el interés social.



B.16. Folio de la solicitud 0001700077819

Síntesis	Investigaciones en contra de servidores públicos o ex servidores públicos.
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Clasificación de información como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Número de carpeta de investigación correspondiente al vehículo marca Volvo placas de circulación (...)" (Sic)

Otros datos para facilitar su localización:

"Vehículo retenido por Célula tercera de la unidad de investigación y litigación en Coatzacoalcos Veracruz" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **UTAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0196/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia al advertir que el peticionario pretende conocer la nomenclatura de una carpeta de investigación que pudiera estar relacionada con un vehículo identificado con número de placas, **confirma** la confidencialidad del pronunciamiento institucional en sentido afirmativo negativo respecto a la existencia de cualquier indagatoria conexa con el vehículo automotriz de referencia, lo anterior toda vez que al ligar a dicho vehículo con la existencia de indagatorias se podría identificar al propietario del mismo, dañando con ello, su presunción de inocencia, buen nombre y moral; ello, atendiendo lo estipulado por la **fracción I, artículo 113** de la Ley en la materia.

Toda vez que, emitir pronunciamiento sobre la existencia o inexistencia de alguna línea de investigación relacionada con un vehículo identificado con número de placas, se podría vincular al propietario del mismo con una investigación, situación que directamente afectaría



su intimidad, honor, buen nombre, e incluso contra la presunción de inocencia, generando un juicio *a priori* por parte de la sociedad.

De esta forma, se precisa la imposibilidad por parte de esta Representación Social para emitir pronunciamiento sobre información que pueda atender la petición de mérito, por lo que actualiza la causal de confidencialidad prevista en el artículo 113, fracción I, de la LFTAIP, que a la letra establece:

TÍTULO CUARTO
INFORMACIÓN CLASIFICADA
CAPÍTULO III
De la Información Confidencial

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Además, como ya se mencionó, el dar a conocer información que asocie a una persona con la existencia de alguna investigación a cargo de esta Fiscalía, esto es, que la misma permita señalar o vincular a una persona con algún hecho posiblemente constitutivo de delito diverso a materia de delincuencia organizada y, que no cuente con una sentencia irrevocable, afecta directamente su intimidad, honor y buen nombre, incluso vulnera la presunción de inocencia, al generar un juicio *a priori* por parte de la sociedad, sin que la autoridad competente haya determinado su culpabilidad o inocencia a través del dictado de una sentencia condenatoria.



Aunado a lo anterior, el *Código Nacional de Procedimientos Penales*, específicamente en su artículo 15, dispone que cualquier persona tiene derecho a que se respete su intimidad, se proteja la información de su vida privada y sus datos personales, cuando sea parte en el procedimiento penal, a saber:

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

CAPÍTULO II
DERECHOS EN EL PROCEDIMIENTO

ARTÍCULO 15. Derecho a la intimidad y a la privacidad

En todo procedimiento penal se respetará el derecho a la intimidad de cualquier persona que intervenga en él, asimismo se protegerá la información que se refiere a la vida privada y los datos personales, en los términos y con las excepciones que fijan la Constitución, este Código y la legislación aplicable.

Robustece ello, lo dictado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a través de las siguientes Tesis Jurisprudenciales, donde establece que el derecho de acceso a la información tiene límites, los cuales aplican en el momento en que se afecta el honor, el decoro, el respeto, la honra, la moral, la estimación y la privacidad de las personas; además de definir la afectación a la moral, como la alteración que sufre una persona a su decoro, honor, reputación y vida privada, y el respeto de la sociedad por la comisión de un hecho ilícito, a saber:

*Tesis: I.3o.C. J/71 (9a.)
Décima Época
Semanaario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tribunales Colegiados de Circuito
160425 1 de 3
Libro IV, Enero de 2012, Tomo 5 Pag. 4036*

DAÑO MORAL. ES LA ALTERACIÓN PROFUNDA QUE SUFRE UNA PERSONA EN SUS SENTIMIENTOS, AFECTOS, CREENCIAS, DECORO, HONOR, REPUTACIÓN, VIDA PRIVADA, CONFIGURACIÓN Y ASPECTOS FÍSICOS, O BIEN, EN LA CONSIDERACIÓN QUE DE SÍ MISMA TIENEN LOS DEMÁS, PRODUCIDA POR HECHO ILÍCITO.

El derecho romano, durante sus últimas etapas, admitió la necesidad de resarcir los daños morales, inspirado en un principio de buena fe, y en la actitud que debe observar todo hombre de respeto a la integridad moral de los demás; consagró este derecho el principio de que junto a los bienes materiales de la vida, objeto de protección jurídica, existen otros inherentes al individuo mismo, que deben también ser tutelados y protegidos, aun cuando no sean bienes materiales. En México, la finalidad del legislador, al reformar los artículos 1916 y adicionar el 1916 Bis del Código Civil para el Distrito Federal, mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de diciembre de mil novecientos ochenta y dos, y posteriormente modificar los párrafos primero y segundo del artículo 1916, consistió en hacer responsable civilmente a todo aquel que, incluso, ejerce su derecho de expresión a través de un medio de información masivo, afecte a sus semejantes, atacando la moral, la paz pública, el derecho de terceros, o bien, provoque algún delito o perturbe el orden público, que son precisamente los límites que claramente previenen los artículos 6o. y 7o. de la Constitución General de la República. Así, de acuerdo al texto positivo, por daño moral debe



entenderse la alteración profunda que una persona sufre en sus sentimientos, afectos, creencias, decoro, honor, reputación, vida privada, configuración y aspectos físicos, o bien, en la consideración que de sí misma tienen los demás, producida por un hecho ilícito. Por tanto, para que se produzca el daño moral se requiere: a) que exista afectación en la persona, de cualesquiera de los bienes que tutela el artículo 1916 del Código Civil; b) que esa afectación sea consecuencia de un hecho ilícito; y, c) que haya una relación de causa-efecto entre ambos acontecimientos.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito.
Tomo: XIV, Septiembre de 2001
Tesis: I.3o.C.244 C
Página: 1309

DERECHO A LA INFORMACIÓN. NO DEBE REBASAR LOS LÍMITES PREVISTOS POR LOS ARTÍCULOS 6o., 7o. Y 24 CONSTITUCIONALES. El derecho a la información tiene como límites el decoro, el honor, el respeto, la circunspección, la honestidad, el recato, la honra y la estimación, pues el artículo 6o. otorga a toda persona el derecho de manifestar libremente sus ideas y prohíbe a los gobernantes que sometan dicha manifestación a inquisición judicial o administrativa, salvo que ataquen la moral, los derechos de tercero, provoquen algún delito o perturben el orden público.

Esta reforma recogió distintas corrientes preocupadas por asegurar a la sociedad una obtención de información oportuna, objetiva y plural, por parte de los grandes medios masivos de comunicación. Conforme a la evolución del artículo 6o. constitucional vigente y comparado con lo que al respecto se ha regulado en otros países, se concluye que a lo largo de la historia constitucional, quienes han tenido el depósito de la soberanía popular para legislar, se han preocupado porque existiera una Norma Suprema que reconociera el derecho del hombre a externar sus ideas, con limitaciones específicas tendientes a equilibrar el derecho del individuo frente a terceros y la sociedad, puesto que en ejercicio de ese derecho no debe menoscabar la moral, los derechos de tercero, que implica el honor, la dignidad y el derecho a la intimidad de éste, en su familia y decoro; así como tampoco puede, en ejercicio de ese derecho, provocar algún delito o perturbar el orden público.

Tales límites son que la opinión no debe atacar la moral, esto es, las ideas que se exterioricen no deben tender a destruir el conjunto de valores que sustenta la cohesión de la sociedad en el respeto mutuo y en el cumplimiento de los deberes que tienen por base la dignidad humana y los derechos de la persona; tampoco debe dañar los derechos de tercero, ni incitar a la provocación de un delito o a la perturbación del orden público.

De modo que la Constitución de mil novecientos diecisiete estableció una obligación por parte del Estado de abstenerse de actuar en contra de quien se expresa libremente, salvo que en el ejercicio de ese derecho se ataque a la moral, a los derechos de tercero, se provoque algún delito o se perturbe el orden público.

Tesis Aislada
Novena Época
Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Pleno
Tomo: XI, Abril de 2000
Tesis: P. LX/2000



Página: 74

DERECHO A LA INFORMACIÓN. SU EJERCICIO SE ENCUENTRA LIMITADO TANTO POR LOS INTERESES NACIONALES Y DE LA SOCIEDAD, COMO POR LOS DERECHOS DE TERCEROS. El derecho a la información consagrado en la última parte del artículo 6o. de la Constitución Federal no es absoluto, sino que, como toda garantía, se halla sujeto a limitaciones o excepciones que se sustentan, fundamentalmente, en la protección de la seguridad nacional y en el respeto tanto a los intereses de la sociedad como a los derechos de los gobernados, limitaciones que, incluso, han dado origen a la figura jurídica del secreto de información que se conoce en la doctrina como "reserva de información" o "secreto burocrático". En estas condiciones, al encontrarse obligado el Estado, como sujeto pasivo de la citada garantía, a velar por dichos intereses, con apego a las normas constitucionales y legales, el mencionado derecho no puede ser garantizado indiscriminadamente, sino que el respeto a su ejercicio encuentra excepciones que lo regulan y a su vez lo garantizan, en atención a la materia a que se refiera; así, en cuanto a la seguridad nacional, se tienen normas que, por un lado, restringen el acceso a la información en esta materia, en razón de que su conocimiento público puede generar daños a los intereses nacionales y, por el otro, sancionan la inobservancia de esa reserva; por lo que hace al interés social, se cuenta con normas que tienden a proteger la averiguación de los delitos, la salud y la moral públicas, mientras que por lo que respecta a la protección de la persona existen normas que protegen el derecho a la vida o a la privacidad de los gobernados.

Por otro lado, no se debe omitir mencionar que la **presunción de inocencia es una garantía de los presuntos responsables, prevista en el artículo 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**, que a la letra dispone:

ARTÍCULO 20. El proceso penal será acusatorio y oral. Se regirá por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación.

B. De los derechos de toda persona imputada:

I. A que se presuma su inocencia mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el juez de la causa.

Asimismo, uno de los principios rectores que rigen el proceso penal, es el de presunción de inocencia, consagrado en el artículo 13, del **Código Nacional de Procedimientos Penales**, que a la letra establece:

ARTÍCULO 13. **Principio de presunción de inocencia**

Toda persona se presume inocente y será tratada como tal en todas las etapas del procedimiento, mientras no se declare su responsabilidad mediante sentencia emitida por el Órgano jurisdiccional, en los términos señalados en este Código.

De lo expuesto, se colige que dar a conocer lo requerido representa afectar la esfera de la vida privada de una persona identificada e identificable, al generar una percepción negativa sobre la persona, ya que se vulnera su honor y su intimidad, y por lo tanto su presunción de inocencia, en razón de que terceras personas podrían presuponer su culpabilidad o responsabilidad, sin que hayan sido demostradas, afectando su prestigio y buen nombre, tal es el caso de señalar que alguna persona ha cometido algún hecho posiblemente constitutivo de delito.



C. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la versión pública de la información requerida:

C.1. Folio de la solicitud 0001700036619

<div></div>	
Síntesis	Asesores que actualmente laboran en la Fiscalía General de la República
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Clasificación de información parcialmente como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Solicito en un archivo Excel una relación o listado de todos los asesores que actualmente tiene esta dependencia, incluyendo los que entraron con la nueva administración desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, indicando para cada caso: 1) nombre completo, 2) desde qué fecha asesora a esta dependencia, 3) áreas o direcciones en las que brinda asesoría, 4) temas en los cuales brindan su asesoría, 5) modelo de contratación o relación laboral bajo el cual brindan sus servicios (honorarios, trabajador de confianza, etc.), 6) salario u honorario mensual." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0197/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la entrega de la versión pública del listado de los asesores con los que cuenta esta institución, incluyendo los que entraron en la presente administración, con el desglose de nombre, fechas desde que asesora, puesto, tipo de contratación, adscripción, temas de asesoría y sueldo bruto, clasificando y resguardando aquella información relacionada con el personal sustantivo de este Órgano Autónomo de procuración de justicia, en términos de lo estipulado en el artículo 110, fracción de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.



Por lo expuesto, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación para el testado de la versión pública referida, se expone la siguiente prueba de daño:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Fiscalía General de la República representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.
- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de dicha Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal, eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



C.2. Folio de la solicitud 0001700036919

Síntesis

Asesores que actualmente laboran en la Fiscalía General de la República

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información parcialmente como confidencial e información clasificada como reservada

Contenido de la Solicitud:

"Solicito copia de las versiones públicas de los curriculums de cada uno de los asesores que actualmente tiene esta dependencia, incluyendo los que entraron con la nueva administración desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.

ACUERDO

CT/ACDO/0198/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la puesta a disposición de la versión pública de los curriculum vitae de los asesores con los que cuenta esta institución, incluyendo los que entraron en la presente administración, previo pago de derechos y los cuales ascienden a un total de 168 fojas útiles, clasificando y testando para tales efectos información considera como confidencial, como lo es el RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico, etc; en términos del **artículo 113, fracción I** de la Ley de la materia, que a la letra señala:

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:

I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

[...]

La información confidencial **no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello...**

(Énfasis añadido).



Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información, así como la elaboración de versiones públicas*, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

- I. **Los datos personales** en los términos de la norma aplicable;
- II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y
- III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.

Del mismo modo, este Órgano Colegiado **confirma** la clasificación de reserva total de los curriculum vitae pertenecientes a los asesores que realizan funciones de carácter sustantivo dentro de esta corporación de procuración de justicia, en términos del artículo 110, fracción V de la LFTAIP, por un periodo de cinco años.

Por lo expuesto, a fin de otorgar una justificación a la causal de clasificación aludida, se presenta la siguiente prueba de daño:

- I. Divulgar información perteneciente a personal sustantivo de la Fiscalía General de la República representa un riesgo real, demostrable e identificable de perjuicio significativo al interés público, en razón que la misma permite identificar y posiblemente hacer reconocibles para algunos grupos delictivos a ciertas personas que, por razones de su cargo, desempeñen funciones estrechamente relacionadas con facultades de prevención y persecución de los delitos federales, circunstancia que permitiría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social.
- II. Derivado de que las actuaciones de la Fiscalía tienen como fin el interés público o general, la investigación y persecución de delitos, por conducto del Ministerio Público Federal y demás personal que lo auxilian, de conformidad con lo establecido en la normatividad aplicable; se desprende que el divulgar la información requerida, superaría el interés público, es decir, provocaría un riesgo de perjuicio toda vez que se estarían proporcionando indicios y demás elementos que afectarían directamente el curso o el



resultado de las investigaciones a cargo de esta Institución Federal, al hacer públicos datos que permitirían localizar a los servidores públicos que realizan actividades sustantivas, en razón que se podría atentar contra su vida, seguridad o su salud, o bien las de su familia o entorno social, derivado que grupos delincuenciales que tengan interés alguno sobre las actuaciones de la indagatoria, atentarían en contra de ellos.

- III. Que atendiendo al principio de proporcionalidad, se desprende que el reservar información relativa a datos de personal sustantivo de dicha Institución, no se traduce en un medio restrictivo de acceso a la información, en virtud que dicha reserva prevalece al proteger la vida, la seguridad y la salud, como bien jurídico tutelado, de dichos funcionarios, mismos que garantizan en todo momento una procuración de justicia federal eficaz y eficiente, apegada a los principios de legalidad, certeza jurídica y respeto a los derechos humanos previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y demás Leyes y Tratados Internacionales.



C.3. Folio de la solicitud 0001700037219

Síntesis

Personal que actualmente labora en la Fiscalía General de la República

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Clasificación de información parcialmente como confidencial

Contenido de la Solicitud:

"Solicito copia de las versiones públicas de los curriculums de cada uno de los funcionarios y funcionarias que entraron con la nueva administración a esta dependencia desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, para ocupar cargos de subsecretario, oficial mayor, director general, director adjunto, director de área o cualquier nivel equivalente" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.

ACUERDO

CT/ACDO/0199/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la puesta a disposición de la versión pública de los curriculum vitae de cada uno de los funcionarios y funcionarias que entraron con la nueva administración a esta dependencia desde el 1 de diciembre de 2018 a la fecha, para ocupar cargos de director general y director adjunto, previo pago de derechos y los cuales ascienden a un total de **58 fojas** útiles, clasificando y resguardando para tales efectos información considera como confidencial, como lo es el RFC, CURP, domicilio, teléfono, correo electrónico, etc; en términos del **artículo 113, fracción I** de la Ley de la materia, que a la letra señala:

ARTÍCULO 113. Se considera información confidencial:



I. La que contiene datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable;

[...]

La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los Servidores Públicos facultados para ello.

(Énfasis añadido).

Aunado a lo anterior, se precisa que en los *Lineamientos Generales en materia de clasificación y desclasificación de la información*, así como la elaboración de versiones públicas, se dispone lo siguiente:

TRIGÉSIMO OCTAVO. Se considera información confidencial:

I. Los datos personales en los términos de la norma aplicable;

II. La que se entregue con tal carácter por los particulares a los sujetos obligados, siempre y cuando tengan el derecho de entregar con dicho carácter la información, de conformidad con lo dispuesto en las leyes o en los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, y

III. Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos.

En este sentido, se desprende que será considerada información clasificada como confidencial, aquella que contenga datos personales de una persona física identificada o identificable, independientemente del medio por el cual se haya obtenido, sin necesidad de estar sujeta a temporalidad alguna y a la que sólo podrán tener acceso los titulares de la información o sus representantes legales.



D. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la incompetencia para proporcionar o pronunciarse por la información requerida:

D.1. Folio de la solicitud 0001700036219

Síntesis

Legislación en materia de violencia doméstica incluye la violencia sexual, salud sexual y reproductiva y tratamiento para el VIH.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Incompetencia

Contenido de la Solicitud:

"1.- ¿Tiene el País una Ley para enfrentar la violencia doméstica?, Si la Respuesta es Afirmativa, 1.1 ¿Cuál es esa Ley?, 2.- ¿La legislación del País sobre violencia doméstica incluye la violencia sexual?, Si la Respuesta es Afirmativa, 2.1 Existen protocolos de actuación ante denuncias por Violencia Sexual, y el marco jurídico al que se apegan, 3.- ¿Existe alguna Ley, política o estrategia nacional de educación integral sobre sexualidad? ¿O algo similar?, Si la respuesta es afirmativa, 3.1 ¿Cuál es esa política o estrategia?, 4.- ¿Hay en el País leyes, políticas, estrategias o protocolos relativos y relativos a la edad libre de consentimiento para los servicios de salud sexual y reproductiva?, Si la respuesta es afirmativa, 4.1 ¿Cuáles son? 5.- ¿Existen en el País leyes, políticas, estrategias, protocolos o normas, relativas y relativos a la edad libre de consentimiento para realizar pruebas de detección del VIH? 5.1 ¿Cuáles son? 6.- En el mismo sentido de la pregunta anterior, ¿En el País, hay leyes, políticas, estrategias, protocolos o normas relativas y relativos a la edad libre de consentimiento para recibir tratamiento para el VIH? 6.1 ¿Cuáles son? 7.- ¿Tiene el país disposiciones legales específicas que prohíban la violencia contra grupos de población clave y personas que viven con el VIH?, Si la respuesta es Afirmativa, 7.1 ¿Cuales son?." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **SDHPDSC y UTAG.**

ACUERDO

CT/ACDO/0200/2019:

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de incompetencia de esta Representación Social para pronunciarse por la información requerida en materia de Legislación de salud sexual y reproductiva y tratamiento para el VIH, ello con fundamento en el artículo **65, fracción II** de la Ley de la



materia, a fin de que se oriente al particular a la Secretaría de Salud a través del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva.

Ello en virtud de que el **Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva**, es la unidad de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud, responsable de las políticas nacionales de los programas de **planificación familiar** y anticoncepción, **salud sexual y reproductiva**, cáncer cérvico uterino, cáncer de mama, salud materna y perinatal, igualdad de género, y **prevención y atención de la violencia familiar**.

Misión

Órgano rector que contribuye a incorporar la perspectiva de género en salud y a mejorar la salud sexual y reproductiva de la población a través de programas y acciones sustentados en evidencias científicas, mejores prácticas y las necesidades de salud de la población, con un sentido humanitario y compromiso social, en un marco de participación social y de respeto a los derechos humanos.

Visión

Ser una organización de referencia en materia de igualdad de género y de salud sexual y reproductiva, con reconocimiento nacional e internacional, caracterizada por una alta competencia técnica y profesional, fundamentada en las evidencias científicas, las mejores prácticas y las necesidades de salud de la población, con un sentido humanitario y compromiso social, con capacidad propositiva e innovadora, incluyente y abierta a la participación de la sociedad civil.

Del mismo modo, el **Centro Nacional para la Prevención y el Control del VIH y el SIDA** a través de la Secretaría de Salud, es la institución responsable de prevenir la transmisión sexual, sanguínea y perinatal del sida, así como de promover acciones para la adecuada atención médica y de apoyo psicológico para las personas infectadas y fomentar actividades de investigación que ayuden a conocer las características epidemiológicas, biomédicas y psicosociales de la enfermedad.

Misión y Visión

Proponer las políticas y estrategias nacionales en materia de prevención, atención y control de la infección por el virus de la inmunodeficiencia humana, el síndrome de inmunodeficiencia adquirida y las infecciones de transmisión sexual y evaluar su impacto, supervisar y evaluar el desarrollo, la aplicación y el impacto de las medidas de prevención, atención y control de la infección por virus de la inmunodeficiencia humana, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida y de las infecciones de transmisión sexual, formular el programa para la prevención y el control del VIH y sida y otras infecciones de transmisión sexual en coordinación con las unidades administrativas competentes, así como evaluar la ejecución del citado programa entre otras.



D.2. Folio de la solicitud 0001700051319

Síntesis

Información relacionada con el Sistema de Justicia
Especializado para Adolescentes

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Incompetencia

Contenido de la Solicitud:

"Solicito la siguiente información en formato abierto (Excel u otro que permita su procesamiento) sobre entradas de adolescentes a la Fiscalía General de la República, relacionadas con el Sistema de Justicia Especializado para Adolescentes. Por favor, contestar los siguientes planteamientos incluyendo la totalidad de las regiones en las cuales la Fiscalía está involucrada.

1. Número de adolescentes por los cuales la FGR inició carpetas de investigación por los siguientes supuestos, para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018. Por favor, desagregar toda la información por adolescente, mes, sexo, edad y hecho(s)/conducta(s) antisocial(es) tipificada(s) como delito(s).

1.1 Detención en flagrancia

1.2 Caso urgente

1.3 Investigación con adolescentes en libertad (denuncia y/o querrela)

2. Del total de adolescentes investigados por la FGR, número de adolescentes sobre los cuales se ejerció la acción penal por los siguientes supuestos, es decir, la forma de conducción del proceso, para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018. Por favor, desagregar toda la información por adolescente, mes, sexo, edad y hecho(s)/conducta(s) antisocial(es) tipificada(s) como delito(s).

1.1 Detención en flagrancia

1.2 Caso urgente

1.3 Citatorio

1.4 Orden de aprehensión

3. Del total de adolescentes investigados, número de adolescentes sobre los cuales la FGR decidió terminar la investigación (no ejercicio de la acción penal), para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018. Por favor, desagregar toda la información por adolescente, mes, sexo, edad y hecho(s)/conducta(s) antisocial(es) tipificada(s) como delito(s).

3.1 Facultad de abstenerse de investigar

3.2 Archivo temporal

3.3 Acuerdo reparatorio

3.4 Criterios de oportunidad

3.5 Justicia alternativa

4. Número de adolescentes bajo investigación abierta, para el periodo de enero de 2015 a diciembre de 2018. Por favor, desagregar toda la información por adolescente, mes, sexo, edad y hecho(s)/conducta(s) antisocial(es) tipificada(s) como delito(s)." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación



el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **COPLADII y UTAG.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0201/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia por unanimidad **confirma** la declaratoria de incompetencia por parte de esta Fiscalía General de la República para pronunciarse por los cuestionamientos que refiere el particular en su petición, de conformidad con lo previsto en la fracción II del artículo 65 de la LFTAIP, a fin de que se oriente a las instancias ya referidas por la UTAG.

Li anterior, en virtud de que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, en su artículo 66 y Décimo Tercero Transitorio, establece que para la procuración de justicia de adolescentes **son competentes las Procuradurías o Fiscalías de cada Entidad Federativa o en su defecto los Sistemas Nacional y Estatales de Desarrollo Integral de la Familia**, tal y como se muestra a continuación:

Artículo 66. El Ministerio Público Especializado en Justicia para Adolescentes

Las Procuradurías Generales de Justicia o Fiscalías de las entidades federativas contarán con agentes del Ministerio Público o Fiscales Especializados en Justicia para Adolescentes que, además de las obligaciones y atribuciones previstas por la Constitución, los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, el Código Nacional y leyes aplicables, tendrán las siguientes:

- I. Garantizar el respeto y cumplimiento de los derechos y garantías de las personas adolescentes;
- II. Garantizar que desde el momento en que sea puesto a su disposición, la persona adolescente se encuentre en un lugar adecuado a su condición de persona en desarrollo y diferente al destinado a los adultos;
- III. Prevenir a la persona adolescente, desde el momento en el que sea puesto a su disposición, sobre su derecho a nombrar un defensor y, en caso de no contar con uno, informar de inmediato a la Defensoría Pública para que le sea designado un defensor;
- IV. Informar de inmediato a la persona adolescente, a sus familiares, al defensor y, en su caso, a la persona que designe como persona en quien confíe, sobre su situación jurídica y los derechos que le asisten;
- V. Llevar a cabo las diligencias correspondientes para comprobar la edad de la persona detenida;
- VI. Otorgar a la persona adolescente, defensor y, en su caso, a su familia, la información sobre la investigación, salvo los casos excepcionales previstos en el Código Nacional;
- VII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la aplicación de criterios de oportunidad, en los términos de esta Ley, el Código Nacional y demás disposiciones aplicables;
- VIII. Garantizar, siempre que resulte procedente, la utilización de mecanismos alternativos, a fin de cumplir con los principios de mínima intervención y subsidiariedad;
- IX. Garantizar que no se divulgue la identidad de la persona adolescente y de la víctima u ofendido, y X. Las demás que establece esta Ley.



Artículo Décimo Tercero. Procuradurías de Protección

En las entidades en las que no existan las Procuradurías de Protección que se contemplan en la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, las facultades otorgadas a estas Procuradurías por esta Ley serán atribuidas a los Sistemas Nacional y Estatales de Desarrollo Integral de la Familia según corresponda, hasta en tanto dichas Procuradurías sean creadas.

Área con líneas punteadas para el desarrollo de la minuta.

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]

[Firma manuscrita]



E. Solicitudes de acceso a la información en las que se analiza la ampliación de término para dar respuesta a la información requerida:

ACUERDO

CT/ACDO/0202/2019:

Los miembros del Comité de Transparencia determinan **autorizar** la ampliación del plazo de respuesta de los folios citados a continuación, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 135 de la LFTAIP. Lo anterior, en virtud de que las unidades administrativas responsables de dar respuesta a las mismas se encuentran realizando una búsqueda exhaustiva en sus archivos de la información requerida:

- E.1. Folio 0001700053819
- E.2. Folio 0001700054919
- E.3. Folio 0001700056819
- E.4. Folio 0001700057619
- E.5. Folio 0001700057719
- E.6. Folio 0001700059019
- E.7. Folio 0001700059919
- E.8. Folio 0001700060019
- E.9. Folio 0001700060319
- E.10. Folio 0001700060819
- E.11. Folio 0001700062619
- E.12. Folio 0001700062919

Sin embargo, se exhorta a los asistentes a que, en aquellos requerimientos en los que dentro del procedimiento de acceso, se encuentre pendiente por concluir el proceso de verificación de la existencia de información en sus archivos, se entregue en un término no mayor a 5 días hábiles los resultados de la búsqueda a la UTAG, con la finalidad de contestarlos en tiempo y forma. Lo anterior, de conformidad con lo establecido en el artículo 135 de la LFTAIP, el cual establece que la respuesta a la solicitud deberá ser notificada al interesado en el menor tiempo posible.



F. Solicitudes para el ejercicio de los derechos ARCO en las que se analizará la procedencia o improcedencia, la versión testada o entrega de los datos personales:

F.1. Folio de la solicitud 0001700347018

Síntesis	Acceso a información que pudiera estar inmersa en el expediente laboral del solicitante.
Sentido de la resolución	Confirma
Rubro	Improcedencia - Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES: Se requiere a esa Procuraduría General de la República (P.G.R.), a través de su Unidad de Enlace para el Acceso a la Información de Datos Personales del C. (...), que obran en su poder y de los cuales el suscrito solicitante es Titular, misma información que consiste y es relativa al Accidente de Trabajo ocurrido al C. (...) en su legal carácter de Trabajador de esa Dependencia el pasado 24 de enero de 2005, en el Nivel E1 de las instalaciones de la Dependencia ubicadas en Avenida Paseo de la Reforma No. 211-213, Colonia Cuauhtémoc, Delegación Política Cuauhtémoc, C.P. 06500 en esta Ciudad de México, por lo que expuesto el antecedente y en ejercicio de la facultad que me concede la ley en la materia, solicito se me haga entrega personal o a través de Apoderado Legal autorizado y designado por el suscrito solicitante, de la o las Documentales Públicas que contienen la siguiente Información:

EL NOMBRAMIENTO VIGENTE AL 24 DE ENERO DE 2005 POR EL QUE SE ACREDITE Y HAGA CONSTAR, EL CARGO O PUESTO-PLAZA QUE TENÍA O TIENE LEGALMENTE CONFERIDO Y EXPEDIDO EN FAVOR DEL C. (...).

Lo anterior, se solicita en la Modalidad de Entrega por internet en el INFOMEX - sin costo. Petición que se sustenta, por encontrar fundamento firme en los preceptos legales que asisten al C. (...) y en el primordial ejercicio de los Artículos Primero, Sexto y Octavo Constitucionales, respecto de la Procuraduría General de la República en su jurídica y administrativa calidad de Sujeto Obligado. De igual manera, por no ser contrario a la moral ni al derecho, sirva el presente para autorizar y facultar en el sentido más amplio que en derecho proceda, a la C. (...), para que a mi nombre y representación, realice todos los trámites y gestiones a que haya lugar ante esa Unidad de Enlace, mismos que conlleven a la finalidad de la presente Solicitud de Información, así como de ser el caso, para recibir de ese Ente Federal, la o las Documentales Públicas que contengan la información solicitada. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, se advierte desde este momento la designación y otorgamiento de poder amplio cumplido y bastante a la persona de mi confianza antes precisada expresamente, para que mediante simple Carta Poder otorgada por el Suscrito, a efecto de que previa acreditación de personalidad ante quien corresponda, en mi nombre y representación y con legal calidad de apoderado y representante legal, desahogue los requerimientos y tramites a que haya lugar, con la única y exclusiva finalidad de que le sea entregada la información exacta y precisa de la información petitionada en los términos solicitados. Petición que se hace en el sentido más puro y más humano, en fundada razón de las dificultades que imponen mis discapacidades físicas e intelectuales para trasladarme, las cuales son consecuencia del riesgo de trabajo indicado al proemio de la presente solicitud de información." (Sic)



Respuesta a solicitud de información adicional:

"...I. El Derecho ARCO que se articula y que por este medio vengo a ejercer, es el del ACCESO a la Información de mis Datos Personales en poder de ese Ente Federal, de los cuales solicito me sean entregados en COPIA SIMPLE – SIN COSTO, mismos que personalmente acudiré ante Usted a la Audiencia de Ley en la que se desahogue el Acto Administrativo de Entrega-Recepción a que haya lugar.

II. Ahora bien, respecto de la prevención que se hace recaer sobre la presente Solicitud de Información de Acceso de Datos Personales del suscrito Titular, RESPETUOSAMENTE ME PERMITO HACER DE SU CONOCIMIENTO, LA IMPOSIBILIDAD E IMPEDIMENTO LEGAL PARA LLEVAR A CABO EL DESAHOGO DE LA PREVENCIÓN QUE SE ME REQUIERE REALIZAR, LO ANTERIOR, EN FUNDADO MÉRITO DE QUE DE UNA CORRECTA LECTURA E INTERPRETACIÓN DE SU OFICIO FGR/UTAG/DG/000183/2019 DE FECHA 08 DE ENERO DE 2019, SE ADVIERTE Y DESPRENDE QUE SU CONTENIDO NO ES RELATIVO NI PERTENECE A MI PERSONA, RAZÓN DE AMPLIO ESPECTRO JURÍDICO Y LEGAL POR LA QUE NO ME ENCUENTRO OBLIGADO NI VINCULADO AL DESAHOGO A QUE HAYA LUGAR.

III. Sin embargo, hago propicio el instrumento de prevención, a efecto de que se sirva por tener desahogado el "Requerimiento de Información Adicional" de la presente Solicitud de Información de Acceso a Datos Personales, toda vez que la misma se encuentra relacionada con las Solicitudes de información que van del folio 0001700342518 al folio 0001700347018.

IV. Ha lugar a precisar que mi petición se fundamenta, sustenta y apoya en el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información y el de Máxima Publicidad, así como en los Principios de Legalidad, Certeza y Seguridad Jurídica consagrados en la Carta Magna, y de igual manera, en términos de los artículos 89º, fracción II y 128º Constitucionales en relación con los numerales 12º, 15º y 18º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en la inteligencia y acorde con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la formalidad constitucional y legislativa que regla, que para que una persona ocupe un cargo público en la Administración Pública Federal o Local, deberá de contar con un Nombramiento legalmente expedido y previo a tomar la posesión del cargo.

V. De igual manera, y a efecto de mejor proveer para la búsqueda y localización de la información requerida, es factible que se encuentre en los archivos de trámite y concentración de la Dirección General de Recursos Humanos, o de la Dirección de Administración de Personal Sustantivo, o de la Dirección General de Servicios Aéreos, o de la Dirección de Relaciones Laborales, o de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o de la Dirección de Prestaciones, o bien, en la Agencia Federal de Investigaciones. Haciendo la pertinente observación de que la Documental Pública de referencia que acredita los extremos de mi Solicitud de Información de Acceso a Datos Personales debe encontrarse engrosada en mi Expediente Personal Laboral como Trabajador de la Dependencia..." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.



ACUERDO
CT/ACDO/0203/2019:

De acuerdo con el **artículo 84, fracción III** en relación con el **artículo 53, párrafo segundo de la LGPDPSO**, este Comité de Transparencia con el objetivo de dar certeza de la búsqueda de los datos personales, determina **confirmar** la inexistencia de los datos personales a los que desea tener acceso el particular; es decir, ello de conformidad con el artículo 55, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales, el cual cita lo siguiente:

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.

Lo anterior encuentra explicación, debido a que la OM por conducto de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, área competente para conocer del tema al que hace alusión el solicitante, manifestó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos; así como, bases de datos del expediente personal con el que cuenta esa unidad administrativa a nombre del suscrito, no le fue posible localizar expresión documental que contenga los datos peticionados como lo requiere el particular, motivo por el cual estos se tornan inexistentes.



F.2. Folio de la solicitud 0001700002519

Síntesis

Sentido de la resolución

Rubro

Acceso a información que pudieran estar inmersa en
el expediente laboral del solicitante.

Confirma

Improcedencia - Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES: Se requiere a esa Procuraduría General de la República (P.G.R.), a través de su Unidad de Enlace para el Acceso a la Información de Datos Personales del C. (...), que obran en su poder y de los cuales el suscrito solicitante es Titular, y en ejercicio de la facultad que me concede la ley en la materia, solicito se me haga entrega personal o a través de Apoderado Legal autorizado y designado por el suscrito solicitante, de la o las Documentales Públicas que contienen la siguiente Información: LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL MEMORÁNDUM NO. DP/002085/2004 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004 SUSCRITO POR LA LIC. GUILLERMINA E. GONZÁLEZ CARRILLO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE PRESTACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL REFERIDO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 DEL C. (...), NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL ALUDIDO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 PROMOVIDO POR EL C. (...). Lo anterior, se solicita en la Modalidad de Entrega por internet en el INFOMEX / PNT- SIN COSTO. Petición que se sustenta, por encontrar fundamento firme en los preceptos legales que asisten al C. (...) y en el primordial ejercicio de los Artículos Primero, Sexto y Octavo Constitucionales, respecto de la Procuraduría General de la República en su jurídica y administrativa calidad de Sujeto Obligado. De igual manera, por no ser contrario a la moral ni al derecho, sirva el presente para autorizar y facultar en el sentido más amplio que en derecho proceda, a la C. (...), para que a mi nombre y representación, realice todos los trámites y gestiones a que haya lugar ante esa Unidad de Enlace, mismos que conlleven a la finalidad de la presente Solicitud de Información, así como de ser el caso, para recibir de ese Ente Federal, la o las Documentales Públicas que contengan la información solicitada. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, se advierte desde este momento la designación y otorgamiento de poder amplio cumplido y bastante a la persona de mi confianza antes precisada expresamente, para que mediante simple Carta Poder otorgada por el Suscrito, a efecto de que previa acreditación de personalidad ante quien corresponda, en mi nombre y representación y con legal calidad de apoderado y representante legal, desahogue los requerimientos y tramites a que haya lugar, con la única y exclusiva finalidad de que se le sea entregada la información exacta y precisa de la información peticionada en los términos



solicitados. Petición que se hace en el sentido más puro y más humano, en fundada razón de las dificultades que imponen mis discapacidades físicas e intelectuales para trasladarme, las cuales son consecuencia del riesgo o accidente de trabajo acaecido en mi integridad personal el pasado 24 de enero de 2005 como trabajador en activo de la Procuraduría General de la República." (Sic)

Respuesta a solicitud de información adicional:

"I. El Derecho ARCO que se articula y que por este medio vengo a ejercer, es el del ACCESO a la Información de mis Datos Personales en poder de ese Ente Federal, de los cuales solicito me sean entregados en COPIA SIMPLE - SIN COSTO, mismos que personalmente acudiré ante Usted a la Audiencia de Ley en la que se desahogue el Acto Administrativo de Entrega-Recepción a que haya lugar.

II. La Solicitud de Información de Acceso de Datos Personales del suscrito Titular, se funda y hace consistir, en que me sea obsequiada copia simple de la Documental Pública consistente en LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL MEMORÁNDUM NÚMERO DP/002085/2004 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004 SUSCRITO POR LA LIC. GUILLERMINA E. GONZÁLEZ CARRILLO EN SU LEGAL CARÁCTER DE DIRECTORA DE PRESTACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL REFERIDO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 DEL C. (...), NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL ALUDIDO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 PROMOVIDO POR EL C. (...). Al respecto y en virtud de que la información proporcionada es precisa y exacta para la debida procedencia y trámite de la Solicitud de Acceso a mis Datos Personales, aunado a que es el único antecedente con que se cuenta para ejercer mi Derecho, me veo en la imposibilidad física y material de aportar nuevos elementos.

III. Ha lugar a precisar que mi petición se fundamenta, sustenta y apoya en el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información y el de Máxima Publicidad, así como en los Principios de Legalidad, Certeza y Seguridad Jurídica consagrados en la Carta Magna, y de igual manera, en términos de los artículos 89º, fracción II y 128º Constitucionales en relación con los numerales 12º, 15º y 18º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en la inteligencia y acorde con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la formalidad constitucional y legislativa que regla, que para que una persona ocupe un cargo público en la Administración Pública Federal o Local, deberá de contar con un Nombramiento legalmente expedido y previo a tomar la posesión del cargo.

IV. De igual manera, y a efecto de mejor proveer para la búsqueda y localización de la información requerida, es factible que se encuentre en los archivos de trámite y concentración de la Oficialía Mayor, o de la Dirección General de Recursos Humanos, o de la Dirección de Administración de Personal Sustantivo, o de la Dirección General de Servicios Aéreos, o de la Dirección de Relaciones Laborales, o de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o de la Dirección de Prestaciones, o de la Dirección de Pagos, o bien, en la Agencia Federal de Investigaciones, Ahora Agencia de Investigación Criminal. Haciendo la pertinente observación de que la Documental Pública de referencia que acredita los extremos de mi Solicitud de Información de Acceso a Datos Personales



debe encontrarse engrosada en mi Expediente Personal Laboral como Trabajador de la Dependencia." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.

ACUERDO

CT/ACDO/0204/2019:

De acuerdo con el **artículo 84, fracción III** en relación con el **artículo 53, párrafo segundo de la LGPDPPSO**, este Comité de Transparencia con el objetivo de dar certeza de la búsqueda de los datos personales, determina **confirmar** la inexistencia de los datos personales a los que desea tener acceso el particular; en específico el **Memorándum** no. Dp/002085/2004 de fecha 27 de septiembre de 2004, ello de conformidad con el artículo 55, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales, el cual cita lo siguiente:

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.

Lo anterior encuentra explicación, debido a que la OM por conducto de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, área competente para conocer del tema al que hace alusión el solicitante, manifestó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos; así como, bases de datos del expediente personal con el que cuenta esa unidad administrativa a nombre del suscrito, no le fue posible localizar expresión documental que contenga los datos peticionados como lo requiere el particular, motivo por el cual estos se tornan inexistentes.



F.3. Folio de la solicitud 0001700002619

Síntesis

Acceso a información que pudiera estar inmersa en el expediente laboral del solicitante.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Imprudencia - Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES: Se requiere a esa Procuraduría General de la República (P.G.R.), a través de su Unidad de Enlace para el Acceso a la Información de Datos Personales del C. (...), que obran en su poder y de los cuales el suscrito solicitante es Titular, y en ejercicio de la facultad que me concede la ley en la materia, solicito se me haga entrega personal o a través de Apoderado Legal autorizado y designado por el suscrito solicitante, de la o las Documentales Públicas que contienen la siguiente información:

LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL MEMORÁNDUM NO. DP/002085/2004 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004 SUSCRITO POR LA LIC. GUILLERMINA E. GONZÁLEZ CARRILLO EN SU CARÁCTER DE DIRECTORA DE PRESTACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL REFERIDO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 DEL C. (...), NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL ALUDIDO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 PROMOVIDO POR EL C. (...).

Lo anterior, se solicita en la Modalidad de Entrega por internet en el INFOMEX / PNT- SIN COSTO, Petición que se sustenta, por encontrar fundamento firme en los preceptos legales que asisten al C. (...) y en el primordial ejercicio de los Artículos Primero, Sexto y Octavo Constitucionales, respecto de la Procuraduría General de la República en su jurídica y administrativa calidad de Sujeto Obligado. De igual manera, por no ser contrario a la moral ni al derecho, sirva el presente para autorizar y facultar en el sentido más amplio que en derecho proceda, a la C. (...), para que a mi nombre y representación, realice todos los trámites y gestiones a que haya lugar ante esa Unidad de Enlace, mismos que conlleven a la finalidad de la presente Solicitud de Información, así como de ser el caso, para recibir de ese Ente Federal, la o las Documentales Públicas que contengan la información solicitada. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, se advierte desde este momento la designación y otorgamiento de poder amplio cumplido y bastante a la persona de mi confianza antes precisada expresamente, para que mediante simple Carta Poder otorgada por el Suscrito, a efecto de que previa acreditación de personalidad ante quien corresponda, en mi nombre y representación y con legal calidad de apoderado y representante legal, desahogue los requerimientos y tramites a que haya lugar, con la única y exclusiva finalidad de que le sea



entregada la información exacta y precisa de la información petitionada en los términos solicitados. Petición que se hace en el sentido más puro y más humano, en fundada razón de las dificultades que imponen mis discapacidades físicas e intelectuales para trasladarme, las cuales son consecuencia del riesgo o accidente de trabajo acaecido en mi integridad personal el pasado 24 de enero de 2005 como trabajador en activo de la Procuraduría General de la República." (Sic)

Respuesta a solicitud de información adicional:

I. El Derecho ARCO que se articula y que por este medio vengo a ejercer, es el del ACCESO a la Información de mis Datos Personales en poder de ese Ente Federal, de los cuales solicito me sean entregados en COPIA SIMPLE – SIN COSTO, mismos que personalmente acudiré ante Usted a la Audiencia de Ley en la que se desahogue el Acto Administrativo de Entrega-Recepción a que haya lugar.

II. Respecto a la Solicitud de Información de Acceso de Datos Personales del suscrito Titular, relativa al Folio 0001700002619, y de la que se me requiere información adicional, téngase por desahogada la prevención respectiva, en términos de lo ya expuesto por el mismo concepto en el folio 0001700002519.

III. Ha lugar a precisar que mi petición se fundamenta, sustenta y apoya en el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información y el de Máxima Publicidad, así como en los Principios de Legalidad, Certeza y Seguridad Jurídica consagrados en la Carta Magna, y de igual manera, en términos de los artículos 89º, fracción II y 128º Constitucionales en relación con los numerales 12º, 15º y 18º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en la inteligencia y acorde con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la formalidad constitucional y legislativa que regla, que para que una persona ocupe un cargo público en la Administración Pública Federal o Local, deberá de contar con un Nombramiento legalmente expedido y previo a tomar la posesión del cargo.

IV. De igual manera, y a efecto de mejor proveer para la búsqueda y localización de la información requerida, es factible que se encuentre en los archivos de trámite y concentración de la Dirección General de Recursos Humanos, o de la Dirección de Administración de Personal Sustantivo, o de la Dirección General de Servicios Aéreos, o de la Dirección de Relaciones Laborales, o de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o de la Dirección de Prestaciones, o de la Dirección de Pagos, o bien, en la Agencia Federal de Investigaciones, ahora Agencia de Investigación Criminal. Haciendo la pertinente observación de que la Documental Pública de referencia que acredita los extremos de mi Solicitud de Información de Acceso a Datos Personales debe encontrarse engrosada en mi Expediente Personal Laboral como Trabajador de la Dependencia." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM.**

**ACUERDO
CT/ACDO/0205/2019:**

De acuerdo con el **artículo 84, fracción III** en relación con el **artículo 53, párrafo segundo de la LGPDPPSO**, este Comité de Transparencia con el objetivo de dar certeza de la búsqueda de los datos personales, determina **confirmar** la inexistencia de los



datos personales a los que desea tener acceso el particular; en específico el **Memorándum** no. Dp/002085/2004 de fecha 27 de septiembre de 2004, ello de conformidad con el artículo 55, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales, el cual cita lo siguiente:

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.

Lo anterior encuentra explicación, debido a que la OM por conducto de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, área competente para conocer del tema al que hace alusión el solicitante, manifestó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos; así como, bases de datos del expediente personal con el que cuenta esa unidad administrativa a nombre del suscrito, no le fue posible localizar expresión documental que contenga los datos peticionados como lo requiere el particular, motivo por el cual estos se tornan inexistentes.



F.4. Folio de la solicitud 0001700002719

Síntesis

Acceso a información que pudiera estar inmersa en el expediente laboral del solicitante.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Improcedencia - Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES: Se requiere a esa Procuraduría General de la República (P.G.R.), a través de su Unidad de Enlace para el Acceso a la Información de Datos Personales del C. (...), que obran en su poder y de los cuales el suscrito solicitante es Titular, y en ejercicio de la facultad que me concede la ley en la materia, solicito se me haga entrega personal o a través de Apoderado Legal autorizado y designado por el suscrito solicitante, de la o las Documentales Públicas que contienen la siguiente Información: LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL OFICIO NÚM. C.A/02330/04 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004 SUSCRITO POR EL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. (...) POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL DESTINATARIO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004, NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL ALUDIDO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004. Lo anterior, se solicita en la Modalidad de Entrega por internet en el INFOMEX / PNT- SIN COSTO. Petición que se sustenta, por encontrar fundamento firme en los preceptos legales que asisten al C. (...) y en el primordial ejercicio de los Artículos Primero, Sexto y Octavo Constitucionales, respecto de la Procuraduría General de la República en su jurídica y administrativa calidad de Sujeto Obligado. De igual manera, por no ser contrario a la moral ni al derecho, sirva el presente para autorizar y facultar en el sentido más amplio que en derecho proceda, a la C. (...), para que a mi nombre y representación, realice todos los trámites y gestiones a que haya lugar ante esa Unidad de Enlace, mismos que conlleven a la finalidad de la presente Solicitud de Información, así como de ser el caso, para recibir de ese Ente Federal, la o las Documentales Públicas que contengan la información solicitada. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, se advierte desde este momento la designación y otorgamiento de poder amplio cumplido y bastante a la persona de mi confianza antes precisada expresamente, para que mediante simple Carta Poder otorgada por el Suscrito, a efecto de que previa acreditación de personalidad ante quien corresponda, en mi nombre y representación y con legal calidad de apoderado y representante legal, desahogue los requerimientos y trámites a que haya lugar, con la única y exclusiva finalidad de que le sea entregada la información exacta y precisa de la información peticionada en los términos solicitados. Petición que se hace en el sentido más puro y más humano, en fundada razón de las dificultades que imponen mis discapacidades físicas e intelectuales para trasladarme, las cuales son consecuencia del riesgo o accidente de trabajo acaecido en mi integridad personal el pasado 24 de enero de 2005 como trabajador en activo de la Procuraduría General de la República." (Sic)



Respuesta a solicitud de información adicional:

"I. El Derecho ARCO que se articula y que por este medio vengo a ejercer, es el del ACCESO a la Información de mis Datos Personales en poder de ese Ente Federal, de los cuales solicito me sean entregados en COPIA SIMPLE - SIN COSTO, mismos que personalmente acudiré ante Usted a la Audiencia de Ley en la que se desahogue el Acto Administrativo de Entrega-Recepción a que haya lugar.

II. La Solicitud de Información de Acceso de Datos Personales del suscrito Titular, se funda y hace consistir, en que me sea obsequiada copia simple de la Documental Pública consistente en LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL OFICIO NO. C.A/02330/04 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004 SUSCRITO POR EL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. (...) POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL DESTINATARIO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004, NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDA A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL ALUDIDO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004. Al respecto y en virtud de que la información proporcionada es precisa y exacta para la debida procedencia y trámite de la Solicitud de Acceso a mis Datos Personales, aunado a que es el único antecedente con que se cuenta para ejercer mi Derecho, me veo en la imposibilidad física y material de aportar nuevos elementos.

III. Ha lugar a precisar que mi petición se fundamenta, sustenta y apoya en el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información y el de Máxima Publicidad, así como en los Principios de Legalidad, Certeza y Seguridad Jurídica consagrados en la Carta Magna, y de igual manera, en términos de los artículos 89º, fracción II y 128º Constitucionales en relación con los numerales 12º, 15º y 18º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en la inteligencia y acorde con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la formalidad constitucional y legislativa que regla, que para que una persona ocupe un cargo público en la Administración Pública Federal o Local, deberá de contar con un Nombramiento legalmente expedido y previo a tomar la posesión del cargo.

IV. De igual manera, y a efecto de mejor proveer para la búsqueda y localización de la información requerida, es factible que se encuentre en los archivos de trámite y concentración de la Oficialía Mayor, o de la Dirección General de Recursos Humanos, o de la Dirección de Administración de Personal Sustantivo, o de la Dirección General de Servicios Aéreos, o de la Dirección de Relaciones Laborales, o de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o de la Dirección de Prestaciones, o de la Dirección de Pagos, o bien, en la Agencia Federal de Investigaciones, Ahora Agencia de Investigación Criminal. Haciendo la pertinente observación de que la Documental Pública de referencia que acredita los extremos de mi Solicitud de Información de Acceso a Datos Personales debe encontrarse engrosada en mi Expediente Personal Laboral como Trabajador de la Dependencia." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:



Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.

ACUERDO
CT/ACDO/0206/2019:

De acuerdo con el **artículo 84, fracción III** en relación con el **artículo 53, párrafo segundo de la LGPDPPSO**, este Comité de Transparencia con el objetivo de dar certeza de la búsqueda de los datos personales, determina **confirmar** la inexistencia de los datos personales a los que desea tener acceso el particular; en específico el **OFICIO NO. C.A/02330/04 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004**, ello de conformidad con el artículo 55, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales, el cual cita lo siguiente:

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.

Lo anterior encuentra explicación, debido a que la OM por conducto de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, área competente para conocer del tema al que hace alusión el solicitante, manifestó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos; así como, bases de datos del expediente personal con el que cuenta esa unidad administrativa a nombre del suscrito, no le fue posible localizar expresión documental que contenga los datos peticionados como lo requiere el particular, motivo por el cual estos se tornan inexistentes.



F.5. Folio de la solicitud 0001700002819

Síntesis

Acceso a información que pudiera estar inmersa en el expediente laboral del solicitante.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Indisponibilidad – Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES: Se requiere a esa Procuraduría General de la República (P.G.R.), a través de su Unidad de Enlace para el Acceso a la Información de Datos Personales del C. (...), que obran en su poder y de los cuales el suscrito solicitante es Titular, y en ejercicio de la facultad que me concede la ley en la materia, solicito se me haga entrega personal o a través de Apoderado Legal autorizado y designado por el suscrito solicitante, de la o las Documentales Públicas que contienen la siguiente Información:

LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL OFICIO NO. C.A/02330/04 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004 SUSCRITO POR EL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. (...) POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL DESTINATARIO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004, NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDA A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL ALUDIDO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004.

Lo anterior, se solicita en la Modalidad de Entrega por internet en el INFOMEX / PNT- SIN COSTO. Petición que se sustenta, por encontrar fundamento firme en los preceptos legales que asisten al C. (...) y en el primordial ejercicio de los Artículos Primero, Sexto y Octavo Constitucionales, respecto de la Procuraduría General de la República en su jurídica y administrativa calidad de Sujeto Obligado. De igual manera, por no ser contrario a la moral ni al derecho, sirva el presente para autorizar y facultar en el sentido más amplio que en derecho proceda, a la C. (...), para que a mi nombre y representación, realice todos los trámites y gestiones a que haya lugar ante esa Unidad de Enlace, mismos que conlleven a la finalidad de la presente Solicitud de Información, así como de ser el caso, para recibir de ese Ente Federal, la o las Documentales Públicas que contengan la información solicitada. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, se advierte desde este momento la designación y otorgamiento de poder amplio cumplido y bastante a la persona de mi confianza antes precisada expresamente, para que mediante simple Carta Poder otorgada por el Suscrito, a efecto de que previa acreditación de personalidad ante quien corresponda, en mi nombre y representación y con legal calidad de apoderado y representante legal, desahogue los requerimientos y tramites a que haya lugar, con la única y exclusiva finalidad de que le sea entregada la información exacta y precisa de la información peticionada en los términos solicitados. Petición que se hace en el sentido más puro y más humano, en fundada razón de las dificultades que imponen mis discapacidades físicas e intelectuales para trasladarme, las cuales



son consecuencia del riesgo o accidente de trabajo acaecido en mi integridad personal el pasado 24 de enero de 2005 como trabajador en activo de la Procuraduría General de la República." (Sic)

Respuesta a solicitud de información adicional:

"I. El Derecho ARCO que se articula y que por este medio vengo a ejercer, es el del ACCESO a la Información de mis Datos Personales en poder de ese Ente Federal, de los cuales solicito me sean entregados en COPIA SIMPLE - SIN COSTO, mismos que personalmente acudiré ante Usted a la Audiencia de Ley en la que se desahogue el Acto Administrativo de Entrega-Recepción a que haya lugar.

II. Respecto a la Solicitud de Información de Acceso de Datos Personales del suscrito Titular, relativa al Folio 0001700002619, y de la que se me requiere información adicional, téngase por desahogada la prevención respectiva, en términos de lo ya expuesto por el mismo concepto en el folio 0001700002519.

III. Ha lugar a precisar que mi petición se fundamenta, sustenta y apoya en el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información y el de Máxima Publicidad, así como en los Principios de Legalidad, Certeza y Seguridad Jurídica consagrados en la Carta Magna, y de igual manera, en términos de los artículos 89º, fracción II y 128º Constitucionales en relación con los numerales 12º, 15º y 18º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en la inteligencia y acorde con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la formalidad constitucional y legislativa que regla, que para que una persona ocupe un cargo público en la Administración Pública Federal o Local, deberá de contar con un Nombramiento legalmente expedido y previo a tomar la posesión del cargo.

IV. De igual manera, y a efecto de mejor proveer para la búsqueda y localización de la información requerida, es factible que se encuentre en los archivos de trámite y concentración de la Dirección General de Recursos Humanos, o de la Dirección de Administración de Personal Sustantivo, o de la Dirección General de Servicios Aéreos, o de la Dirección de Relaciones Laborales, o de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o de la Dirección de Prestaciones, o de la Dirección de Pagos, o bien, en la Agencia Federal de Investigaciones, ahora Agencia de Investigación Criminal. Haciendo la pertinente observación de que la Documental Pública de referencia que acredita los extremos de mi Solicitud de Información de Acceso a Datos Personales debe encontrarse engrosada en mi Expediente Personal Laboral como Trabajador de la Dependencia." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0207/2019:**

De acuerdo con el **artículo 84, fracción III** en relación con el **artículo 53, párrafo segundo de la LGPDPSO**, este Comité de Transparencia con el objetivo de dar certeza de la búsqueda de los datos personales, determina **confirmar** la inexistencia de los datos personales a los que desea tener acceso el particular; en específico el **OFICIO NO. C.A/02330/04 DE FECHA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2004**, ello de conformidad con el artículo 55.



fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales, el cual cita lo siguiente:

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.

Lo anterior encuentra explicación, debido a que la OM por conducto de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, área competente para conocer del tema al que hace alusión el solicitante, manifestó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos; así como, bases de datos del expediente personal con el que cuenta esa unidad administrativa a nombre del suscrito, no le fue posible localizar expresión documental que contenga los datos peticionados como lo requiere el particular, motivo por el cual estos se tornan inexistentes. -----



F.6. Folio de la solicitud 0001700002919

Síntesis

Acceso a información que pudiera estar inmersa en el expediente laboral del solicitante.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Imprudencia – Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES: Se requiere a esa Procuraduría General de la República (P.G.R.), a través de su Unidad de Enlace para el Acceso a la Información de Datos Personales del C. (...), que obran en su poder y de los cuales el suscrito solicitante es Titular, y en ejercicio de la facultad que me concede la ley en la materia, solicito se me haga entrega personal o a través de Apoderado Legal autorizado y designado por el suscrito solicitante, de la o las Documentales Públicas que contienen la siguiente Información: LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL MEMORÁNDUM NO. DP/002085/2004 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2004 SUSCRITO POR LA LIC. GUILLERMINA E. GONZÁLEZ CARRILLO EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE PRESTACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL REFERIDO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 DEL C. (...), NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL PRECISADO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 ARTICULADO POR EL C. (...). Lo anterior, se solicita en la Modalidad de Entrega por internet en el INFOMEX / PNT- SIN COSTO, Petición que se sustenta, por encontrar fundamento firme en los preceptos legales que asisten al C. (...) y en el primordial ejercicio de los Artículos Primero, Sexto y Octavo Constitucionales, respecto de la Procuraduría General de la República en su jurídica y administrativa calidad de Sujeto Obligado. De igual manera, por no ser contrario a la moral ni al derecho, sirva el presente para autorizar y facultar en el sentido más amplio que en derecho proceda, a la C. (...), para que a mi nombre y representación, realice todos los trámites y gestiones a que haya lugar ante esa Unidad de Enlace, mismos que conlleven a la finalidad de la presente Solicitud de Información, así como de ser el caso, para recibir de ese Ente Federal, la o las Documentales Públicas que contengan la información solicitada. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, se advierte desde este momento la designación y otorgamiento de poder amplio cumplido y bastante a la persona de mi confianza antes precisada expresamente, para que mediante simple Carta Poder otorgada por el Suscrito, a efecto de que previa acreditación de personalidad ante quien corresponda, en mi nombre y representación y con legal calidad de apoderado y representante legal, desahogue los requerimientos y tramites a que haya lugar, con la única y exclusiva finalidad de que le sea entregada la información exacta y precisa de la información petitionada en los términos



solicitados. Petición que se hace en el sentido más puro y más humano, en fundada razón de las dificultades que imponen mis discapacidades físicas e intelectuales para trasladarme, las cuales son consecuencia del riesgo o accidente de trabajo acaecido en mi integridad personal el pasado 24 de enero de 2005 como trabajador en activo de la Procuraduría General de la República." (Sic)

Respuesta a solicitud de información adicional:

I. El Derecho ARCO que se articula y que por este medio vengo a ejercer, es el del ACCESO a la Información de mis Datos Personales en poder de ese Ente Federal, de los cuales solicito me sean entregados en COPIA SIMPLE - SIN COSTO, mismos que personalmente acudiré ante Usted a la Audiencia de Ley en la que se desahogue el Acto Administrativo de Entrega-Recepción a que haya lugar.

II. La Solicitud de Información de Acceso de Datos Personales del suscrito Titular, se funda y hace consistir, en que me sea obsequiada copia simple de la Documental Pública consistente en LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL MEMORÁNDUM NÚMERO DP/002085/2004 DE FECHA 27 DE SEPTIEMBRE DE 2004 SUSCRITO POR LA LIC. GUILLERMINA E. GONZÁLEZ CARRILLO EN SU LEGAL CARÁCTER DE DIRECTORA DE PRESTACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CALIDAD DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL REFERIDO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 DEL C. (...), NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL ALUDIDO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 PROMOVIDO POR EL C. (...). Al respecto y en virtud de que la información proporcionada es precisa y exacta para la debida procedencia y trámite de la Solicitud de Acceso a mis Datos Personales, aunado a que es el único antecedente con que se cuenta para ejercer mi Derecho, me veo en la imposibilidad física y material de aportar nuevos elementos.

III. Ha lugar a precisar que mi petición se fundamenta, sustenta y apoya en el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información y el de Máxima Publicidad, así como en los Principios de Legalidad, Certeza y Seguridad Jurídica consagrados en la Carta Magna, y de igual manera, en términos de los artículos 89º, fracción II y 128º Constitucionales en relación con los numerales 12º, 15º y 18º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en la inteligencia y acorde con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la formalidad constitucional y legislativa que regla, que para que una persona ocupe un cargo público en la Administración Pública Federal o Local, deberá de contar con un Nombramiento legalmente expedido y previo a tomar la posesión del cargo.

IV. De igual manera, y a efecto de mejor proveer para la búsqueda y localización de la información requerida, es factible que se encuentre en los archivos de trámite y concentración de la Oficialía Mayor, o de la Dirección General de Recursos Humanos, o de la Dirección de Administración de Personal Sustantivo, o de la Dirección General de Servicios Aéreos, o de la Dirección de Relaciones Laborales, o de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o de la Dirección de Prestaciones, o de la Dirección de Pagos, o bien, en la Agencia Federal de Investigaciones, Ahora Agencia de Investigación Criminal. Haciendo la pertinente observación de que la Documental Pública de referencia que acredita los extremos de mi Solicitud de Información de Acceso a Datos Personales



debe encontrarse engrosada en mi Expediente Personal Laboral como Trabajador de la Dependencia." (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0208/2019:**

De acuerdo con el **artículo 84, fracción III** en relación con el **artículo 53, párrafo segundo de la LGPDPPSO**, este Comité de Transparencia con el objetivo de dar certeza de la búsqueda de los datos personales, determina **confirmar** la inexistencia de los datos personales a los que desea tener acceso el particular; en específico el **Memorándum** no. Dp/002085/2004 de fecha 27 de septiembre de 2004, ello de conformidad con el artículo 55, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales, el cual cita lo siguiente:

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

...

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.

Lo anterior encuentra explicación, debido a que la OM por conducto de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, área competente para conocer del tema al que hace alusión el solicitante, manifestó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos; así como, bases de datos del expediente personal con el que cuenta esa unidad administrativa a nombre del suscrito, no le fue posible localizar expresión documental que contenga los datos peticionados como lo requiere el particular, motivo por el cual estos se tornan inexistentes. -----



F.7. Folio de la solicitud 0001700003019

Síntesis

Acceso a información que pudiera estar inmersa en el expediente laboral del solicitante.

Sentido de la resolución

Confirma

Rubro

Imprudencia - Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"SOLICITUD DE ACCESO A DATOS PERSONALES: Se requiere a esa Procuraduría General de la República (P.G.R.), a través de su Unidad de Enlace para el Acceso a la Información de Datos Personales del C. (...), que obran en su poder y de los cuales el suscrito solicitante es Titular, y en ejercicio de la facultad que me concede la ley en la materia, solicito se me haga entrega personal o a través de Apoderado Legal autorizado y designado por el suscrito solicitante, de la o las Documentales Públicas que contienen la siguiente Información:

LA DOCUMENTAL PÚBLICA CONSISTENTE EN EL MEMORÁNDUM NO. DP/002085/2004 DE FECHA 27 DE AGOSTO DE 2004 SUSCRITO POR LA LIC. GUILLERMINA E. GONZÁLEZ CARRILLO EN SU CALIDAD DE DIRECTORA DE PRESTACIONES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, MISMO QUE FUE O SE ENCUENTRA PERSONALIZADO Y DIRIGIDO AL C. JORGE BRAVO RAMÍREZ EN SU CARÁCTER DE COORDINADOR ADMINISTRATIVO DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS HUMANOS DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, POR EL CUAL SE HACE DEL CONOCIMIENTO DEL REFERIDO COORDINADOR ADMINISTRATIVO, QUE AL REALIZAR EL TRÁMITE DEL FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 DEL C. (...), NO FUE POSIBLE LA GESTIÓN DEL FORMATO EN CITA, DEBIDO A QUE LA PLAZA DE SUBCOORDINADOR DE SERVICIOS ESPECIALES O ESPECIALIZADOS AL CARGO DEL C. (...), NO ESTÁ O ESTABA AUTORIZADA PARA CONTAR CON EL BENEFICIO DEL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO EN COMENTO, POR LO CUAL, SE PROCEDE A LA DEVOLUCIÓN DEL ORIGINAL DEL PRECISADO FORMATO DE SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL SEGURO DE SEPARACIÓN INDIVIDUALIZADO DE FECHA 06 DE AGOSTO DE 2004 ARTICULADO POR EL C. (...).

Lo anterior, se solicita en la Modalidad de Entrega por internet en el INFOMEX / PNT- SIN COSTO. Petición que se sustenta, por encontrar fundamento firme en los preceptos legales que asisten al C. (...) y en el primordial ejercicio de los Artículos Primero, Sexto y Octavo Constitucionales, respecto de la Procuraduría General de la República en su jurídica y administrativa calidad de Sujeto Obligado. De igual manera, por no ser contrario a la moral ni al derecho, sirva el presente para autorizar y facultar en el sentido más amplio que en derecho proceda, a la C. (...), para que a mi nombre y representación, realice todos los trámites y gestiones a que haya lugar ante esa Unidad de Enlace, mismos que conlleven a la finalidad de la presente Solicitud de Información, así como de ser el caso, para recibir de ese Ente Federal, la o las Documentales Públicas que contengan la información solicitada. Por lo que en mérito de lo antes expuesto, se advierte desde este momento la designación y otorgamiento de poder amplio cumplido y bastante a la persona de mi confianza antes precisada expresamente, para que mediante simple Carta Poder otorgada por el Suscrito, a efecto de que previa acreditación de personalidad ante quien corresponda, en mi nombre y representación y con legal calidad de apoderado y representante legal, desahogue los requerimientos y tramites a que haya lugar, con la única y exclusiva finalidad de que le sea



entregada la información exacta y precisa de la información petitionada en los términos solicitados. Petición que se hace en el sentido más puro y más humano, en fundada razón de las dificultades que imponen mis discapacidades físicas e intelectuales para trasladarme, las cuales son consecuencia del riesgo o accidente de trabajo acaecido en mi integridad personal el pasado 24 de enero de 2005 como trabajador en activo de la Procuraduría General de la República." (Sic)

Respuesta a solicitud de información adicional:

I. El Derecho ARCO que se articula y que por este medio vengo a ejercer, es el del ACCESO a la Información de mis Datos Personales en poder de ese Ente Federal, de los cuales solicito me sean entregados en COPIA SIMPLE - SIN COSTO, mismos que personalmente acudiré ante Usted a la Audiencia de Ley en la que se desahogue el Acto Administrativo de Entrega-Recepción a que haya lugar.

II. Respecto a la Solicitud de Información de Acceso de Datos Personales del suscrito Titular, relativa al Folio 0001700003019, y de la que se me requiere información adicional, téngase por desahogada la prevención respectiva, en términos de lo ya expuesto por el mismo concepto en el folio 0001700002919.

III. Ha lugar a precisar que mi petición se fundamenta, sustenta y apoya en el ejercicio del Derecho Humano de Acceso a la Información y el de Máxima Publicidad, así como en los Principios de Legalidad, Certeza y Seguridad Jurídica consagrados en la Carta Magna, y de igual manera, en términos de los artículos 89º, fracción II y 128º Constitucionales en relación con los numerales 12º, 15º y 18º de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, ello en la inteligencia y acorde con los criterios jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen la formalidad constitucional y legislativa que regla, que para que una persona ocupe un cargo público en la Administración Pública Federal o Local, deberá de contar con un Nombramiento legalmente expedido y previo a tomar la posesión del cargo.

IV. De igual manera, y a efecto de mejor proveer para la búsqueda y localización de la información requerida, es factible que se encuentre en los archivos de trámite y concentración de la Dirección General de Recursos Humanos, o de la Dirección de Administración de Personal Sustantivo, o de la Dirección General de Servicios Aéreos, o de la Dirección de Relaciones Laborales, o de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, o de la Dirección de Prestaciones, o de la Dirección de Pagos, o bien, en la Agencia Federal de Investigaciones, ahora Agencia de Investigación Criminal. Haciendo la pertinente observación de que la Documental Pública de referencia que acredita los extremos de mi Solicitud de Información de Acceso a Datos Personales debe encontrarse engrosada en mi Expediente Personal Laboral como Trabajador de la Dependencia" (Sic)

Unidades administrativas involucradas:

Conforme a las facultades establecidas en la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, su Reglamento, el Acuerdo A/238/12 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 20 de septiembre de 2012, el Acuerdo A/072/16 publicado en el Diario Oficial de la Federación el 11 de mayo de 2016, y demás disposiciones legales aplicables, la presente solicitud de información se turnó para su atención a: **OM**.

**ACUERDO
CT/ACDO/0209/2019:**

De acuerdo con el **artículo 84, fracción III** en relación con el **artículo 53, párrafo segundo de la LGPDPSO**, este Comité de Transparencia con el objetivo de dar certeza de la búsqueda de los datos personales, determina **confirmar** la inexistencia de los



datos personales a los que desea tener acceso el particular; en específico el **Memorándum** no. Dp/002085/2004 de fecha 27 de septiembre de 2004, ello de conformidad con el artículo 55, fracción II de la Ley General de Protección de Datos Personales, el cual cita lo siguiente:

Artículo 55. Las únicas causas en las que el ejercicio de los derechos ARCO no será procedente son:

II. Cuando los datos personales no se encuentren en posesión del responsable.

Lo anterior encuentra explicación, debido a que la OM por conducto de la Dirección General Adjunta de Relaciones Laborales y Apoyo Jurídico, área competente para conocer del tema al que hace alusión el solicitante, manifestó que después de realizar una búsqueda exhaustiva y razonable en los archivos físicos y electrónicos; así como, bases de datos del expediente personal con el que cuenta esa unidad administrativa a nombre del suscrito, no le fue posible localizar expresión documental que contenga los datos peticionados como lo requiere el particular, motivo por el cual estos se tornan inexistentes.



La resolución para el presente asunto se encuentra al final del acta de la presente sesión.

[illegible]

112



Sin asuntos generales en la presente sesión.

[illegible]

113



Siendo las catorce horas con treinta minutos del mismo día, se dio por terminada la Novena Sesión Ordinaria del año 2019 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura
Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.

Lcda. Adriana Fabiola Rodríguez León.

Suplente del Director de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del Área Coordinadora de
Archivos en la Institución.

Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control

Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.



A.1. Folio de la solicitud 0001700033019 - Recurso de revisión RRA 1786/19

Síntesis	Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificada y no Reclamadas
Rubro	Inexistencia

Contenido de la Solicitud:

"DJUNTO MI SOLICITUD Solicito se me informe lo siguiente en archivo Excel como datos abiertos para entregarse por Infomex o a mi correo registrado lo siguiente: 1 Sobre el dato de que hay: "Más de 26 mil cuerpos sin identificar" según lo informó Segob en este comunicado oficial: <https://www.gob.mx/segob/prensa/segob-en-busqueda-de-mas-de-30-mil-personas-desaparecidas-en-mexico> Pido se me informe lo siguiente: a) Cuál es la cifra exacta de cadáveres sin identificar en el país b) La cifra anterior se me desglose por cada entidad federativa, precisando también por cada entidad federativa lo siguiente: i. Cuántos cuerpos sin identificar están en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) ii. Cuántos cuerpos sin identificar hay en fosas comunes iii. Cuántos cuerpos sin identificar hay en panteones ministeriales iv. Del resto de los cuerpos sin identificar que no estén en los Semefos, ni en fosas comunes ni en panteones ministeriales, se precise en qué lugares están (cuántos por cada lugar) 2 Sobre el dato de que hay "Según datos de Plataforma México, a la fecha se cuenta con el registro por huella dactilar de 36 mil 708 personas fallecidas sin identificar en el país", según lo informó la Comisión Nacional de Búsqueda de Segob en este comunicado oficial: <https://www.gob.mx/segob/prensa/mensaje-del-comisionado-nacional-roberto-cabrera-alfaro-sobre-las-acciones-realizadas-por-la-comision-nacional-de-busqueda?idiom=es> Pido se me informe lo siguiente: a) Cuál es la cifra exacta de cadáveres sin identificar en el país b) La cifra anterior se me desglose por cada entidad federativa, precisando también por cada entidad federativa lo siguiente: i. Cuántos cuerpos sin identificar están en los Servicios Médicos Forenses (Semefos) ii. Cuántos cuerpos sin identificar hay en fosas comunes iii. Cuántos cuerpos sin identificar hay en panteones ministeriales iv. Del resto de los cuerpos sin identificar que no estén en los Semefos, ni en fosas comunes ni en panteones ministeriales, se precise en qué lugares están (cuántos por cada lugar)" (Sic).

Antecedentes

En respuesta inicial, se le orientó al particular a la Comisión Nacional de Búsqueda perteneciente a la Secretaría de Gobernación (SEGOB).

No obstante, el solicitante se inconformó con la respuesta otorgada por esta Institución, arguyendo lo que a continuación se expone:

"Presento el siguiente recurso de revisión debido a que el sujeto obligado no brindó acceso a ninguno de los puntos solicitados, además de que me turnó hacia un sujeto obligado distinto, a pesar de que todo lo solicitado sí entra dentro de su marco de responsabilidades y funciones legales, por lo que su determinación impidió que pudiera ejercer mi derecho de acceso a la información.



Recurro la totalidad de los puntos e incisos de mi solicitud pues en ninguno se brindó acceso a la información solicitada.

Mis argumentos:

1 El sujeto obligado no brindó acceso a la información solicitada asegurando que la misma es competencia de la Comisión Nacional de Búsqueda que forma parte de la Segob, sin embargo, esta aseveración del sujeto obligado es incorrecta pues de acuerdo con el marco legal vigente la información solicitada sí resulta de su competencia.

Esto es así pues la solicitud de información hace referencia a los cuerpos no identificados, y no debe pasarse por alto que la "Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas" señala que es responsabilidad de este sujeto obligado la elaboración del "Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas".

Por lo tanto, el sujeto obligado sí tiene responsabilidades y competencias legales en la materia a la que hace referencia mi solicitud; sin embargo y pese a ello, no brindó la información pública solicitada.

2 También recurro el hecho de que el sujeto obligado me remitió a un portal con datos sobre personas desaparecidas, por lo que no se corresponde con la información pública solicitada en mi petición.

Por todo lo anterior recurro la respuesta del sujeto obligado con el fin de que este efectúe una búsqueda exhaustiva de la información solicitada, para que brinde acceso pleno a todos los puntos e incisos solicitados, con el nivel de detalle solicitado, y en el formato de entrega solicitado, para poder así ejercer satisfactoriamente mi derecho de acceso a la información pública. " (Sic)

En esa consideración, **a efecto de sobreseer el recurso de revisión**, se turnó la petición a la Coordinación General de Servicios Periciales (CGSP), a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad (SDHPDSC), a la Agencia de Investigación Criminal (AIC) y la Coordinación de Planeación, Desarrollo e Innovación Institucional (COPLADII), las cuales indicaron no contar con información al respecto, **con excepción de la CGSP**, la cual manifestó lo siguiente:

Que proporciona estadística de manera general respecto al año de exhumación y número de cadáveres no identificados, de acuerdo al registro de la estadística con la que cuenta esa Coordinación, sin embargo, por lo que hace al "Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificadas y no Reclamadas" al que hace alusión el particular, la Ley General de en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Forzada cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de personas, menciona que tal Registro, estará a cargo del Procuraduría, ahora Fiscalía, y que la información contenida se actualiza en tiempo real por **parte de los servicios periciales o los servicios médicos forenses de la federación** y las entidades federativas, en cuanto se recabe la información, de conformidad con los lineamientos que emita la Procuraduría y la Secretaría de Salud o en su caso, sin embargo, **el Registro aún se encuentra en proceso de creación**, por lo que se encuentra impedida materialmente para aportar información sobre la solicitud de mérito.

Del mismo modo, informó que para el caso en concreto, resulta aplicable el Criterio 20/13 emitido por el Pleno del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).



Es así, que a fin de otorgar certeza al particular de la respuesta emitida por esta Instancia de procuración de justicia, se emite la siguiente determinación:

**ACUERDO
PGR/CT/005/2019:**

En el marco de lo dispuesto en los artículos 65, fracción II, 102 y 140 de la LFTAIP, el Comité de Transparencia determina por unanimidad **confirmar** la declaratoria de inexistencia del Registro Nacional de Personas Fallecidas no Identificada y no Reclamadas, conforme al procedimiento previsto en el artículo 141 de la LFTAIP, en concordancia con el criterio 20/13 emitido por el pleno del INAI, el cual establece que:

Procede declarar la inexistencia cuando la información solicitada sea el resultado de un proceso deliberativo en trámite. De acuerdo con el artículo 14, fracción VI de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, esta causal de clasificación tiene por objeto proteger la información que sirve de base para deliberar sobre un asunto determinado, a fin de evitar que su publicidad afecte el proceso deliberativo. Ahora bien, la inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la dependencia o entidad aun cuando tenga facultades para contar con ella. En este sentido, en los casos en que se esté llevando a cabo un proceso deliberativo del cual aún no se emite una determinación definitiva y lo solicitado por el particular consista precisamente en esa determinación, procede que el Comité de Información declare formalmente su inexistencia. -----



Se expide la presente resolución para los efectos a los que haya lugar, misma que forma parte de la Novena Sesión Ordinaria del año 2019 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES



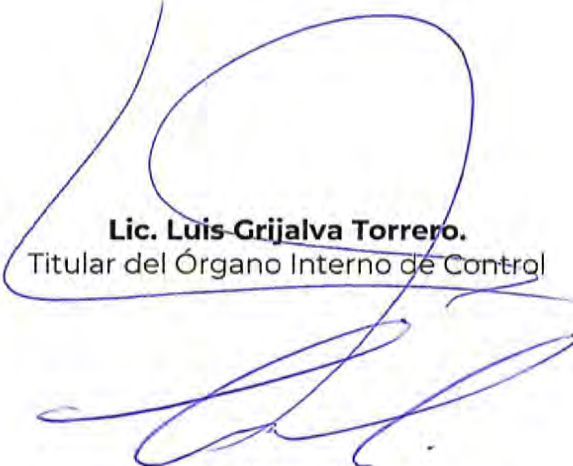
Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura
Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.




Lic. Adriana Fabiola Rodríguez León

Suplente del Director de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del área coordinadora de
archivos



Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control



Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró



Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.


Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.

COMITÉ DE TRANSPARENCIA¹

NOVENA SESIÓN ORDINARIA 2019

5 DE MARZO DE 2019

¹ En términos de lo dispuesto en los transitorios Sexto, Noveno, fracciones III, IV y VI y Décimo Segundo, fracción II del Decreto por el que se expide la Ley Orgánica de la Fiscalía General de la República y su DECLARATORIA de entrada en vigor que le confiere Autonomía Constitucional; así como en los artículos 1, 3, y 6 del Reglamento de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República, en relación con el Acuerdo A/072/16, por el que se crea la Unidad de Transparencia y Apertura Cubernamental y se conforma el Comité de Transparencia de la Procuraduría General de la República.





III. Acuerdo por el cual se establece el procedimiento de atención de solicitudes de acceso a la información pública y de datos personales prioritarias y solicitudes en donde se amplíe el término para dar respuesta.

De conformidad con el artículo 135 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LFTAIP), las respuestas a las solicitudes deberán ser *atendidas en un plazo de 20 días hábiles y, excepcionalmente, dicho plazo podrá ampliarse hasta por diez días más, siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas las cuales deberán ser aprobadas por el Comité de Transparencia (CT), mediante resolución y notificadas a los solicitantes.*

Por lo expuesto, el Comité de Transparencia con la finalidad de ser proactivo en el ejercicio de la transparencia y establecer políticas que permitan regular la gestión interna de las solicitudes atendidas por la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG) y mejorar la calidad y los tiempos de respuesta que se otorgan a los particulares, es que el 22 de junio de la anualidad 2018, se estableció el **procedimiento para recabar o recibir información en la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental (UTAG), susceptible de revisión por parte del CT**, donde se instituyó lo siguiente:

1. Que las respuestas que deban estar sujetas a la revisión del CT (*clasificación de información reservada y/o confidencial, versiones públicas, declaraciones de incompetencia e inexistencia*), deben hacerlo del conocimiento **a más tardar** el miércoles previo al día martes en la cual se lleve a cabo la sesión ordinaria del CT.
2. Que en caso de que alguna unidad administrativa someta a consideración del CT algún proyecto de versión pública, deberán presentar las expresiones documentales en versión íntegra y pública, indicando los datos que consideran deberían ser testados de manera fundada y motivada.
3. Que no se incluirán proyectos o asuntos para la revisión o análisis del CT, en tanto no se tenga pronunciamiento oficial por parte de las unidades administrativas a más tardar el miércoles previo a la celebración del Comité.
4. Que la información que deba ser sometida a consideración del CT, no se recibirá en la oficialía de partes de la UTAG, el día de la celebración de una sesión ordinaria, salvo causa debidamente justificada.
5. Que excepcionalmente, se recibirán correos electrónicos enviados en tiempo y forma, fundados y motivados, como adelanto a sus pronunciamientos institucionales.

Adicionalmente, mediante la Séptima Sesión Ordinaria 2019, de fecha 12 de febrero de la presente anualidad, la Presidenta del CT y Titular de la UTAG, exhortó a los enlaces de transparencia a que



identificaran y gestionaran al interior de las unidades administrativas que representan, la atención oportuna e inmediata de las solicitudes a efecto de evitar se prorroguen de manera innecesaria, recalcando que únicamente era comprensible solicitar una prórroga para otorgar respuesta cuando por la **complejidad** en la solicitud y búsqueda de la información así se requiriera. Además, se exhortó a los enlaces de transparencia coadyuvar en la detección oportuna y atención eficaz de las solicitudes de **potencial riesgo** y/o de **atención prioritaria**, esto es, aquellas que por su naturaleza y alcance puedan generar un impacto mediático a la institución.

No obsta señalar, que en todas las sesiones del CT del año inmediato anterior, se ha insertado punto de acuerdo en la que se exhorta el cumplimiento de los citados compromisos por parte de las unidades administrativas, respecto al tema de mérito, mismas que han quedado asentadas en las respectivas actas de sesión y que se encuentran públicamente disponibles en el Portal Institucional de este Sujeto Obligado.

Sin embargo, ante los diversos **casos de solicitudes de potencial riesgo y/o de atención prioritaria** en las que las unidades administrativas **remiten de manera tardía a los enlaces de transparencia, respuestas sin cumplir los tiempos y condiciones instruidos** en los acuerdos anteriormente citados, la **Coordinación de Asesores de la Oficina del Fiscal General de la República**, en colaboración con el Comité de Transparencia, exteriorizaron a los Enlaces de Transparencia las medidas que se deberán adoptar respecto de las solicitudes en las cuales se amplíe el término para dar respuesta y que se identifiquen como solicitudes de atención prioritaria.

Así las cosas, y en virtud de que se deben tomar las medidas pertinentes para la atención de solicitudes que revistan las características anteriormente mencionadas, es que el Comité de Transparencia determina por unanimidad el siguiente:

ACUERDO

De conformidad con lo previsto en artículo 65, fracciones I, II, III y IV de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los cuales señalan:

Artículo 65. Los Comités de Transparencia tendrán las facultades y atribuciones siguientes:

I. Instituir, coordinar y supervisar, en términos de las disposiciones aplicables, las acciones y los procedimientos para asegurar la mayor eficacia en la gestión de las solicitudes en materia de acceso a la información;

II. Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las Áreas de los sujetos obligados;

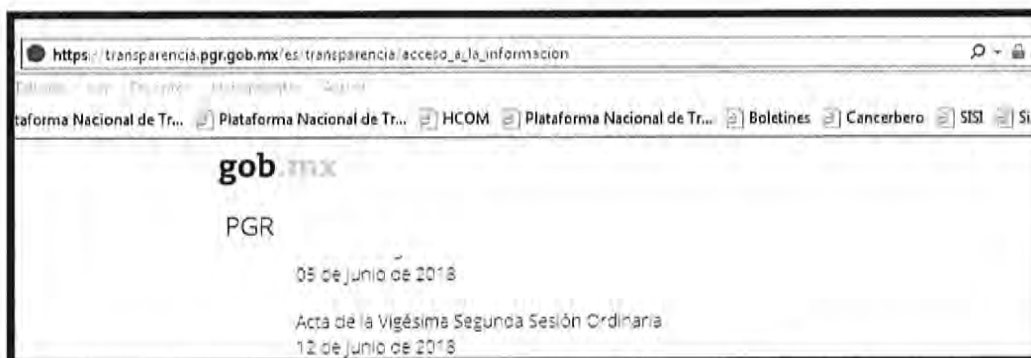


III. Ordenar, en su caso, a las Áreas competentes que generen la información que derivado de sus facultades, competencias y funciones deban tener en posesión o que previa acreditación de la imposibilidad de su generación, **exponga, de forma fundada y motivada, las razones por las cuales, en el caso particular, no ejercieron dichas facultades, competencias o funciones:**

IV. Establecer políticas para facilitar la obtención de información y el ejercicio del derecho de acceso a la información:

Acuerda lo siguiente:

1. Que todas las unidades administrativas **sin excepción** deberán apegarse al "**Acuerdo del Comité de Transparencia mediante el cual se establece el procedimiento para recabar o recibir información en la Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental susceptible de revisión por parte del Comité de Transparencia.**" de fecha 12 de junio de 2018, y el cual fue aprobado en su Vigésima Segunda Sesión Ordinaria 2018, (se anexa copia de Acuerdo) misma que está públicamente disponible y que puede ser consultada a través de la siguiente dirección electrónica:



https://transparencia.pgr.gob.mx/es/transparencia/acceso_a_la_informacion

2. Que todas las unidades administrativas **sin excepción alguna** deberán apegarse a lo previsto en el artículo 135 de la LFTAIP; es decir, deberán realizar las gestiones internas necesarias con el objetivo de que se otorgue a los particulares una respuesta institucional que cumpla los principios de transparencia y exhaustividad en la entrega de la información, en un plazo que no podrá exceder de veinte días, contados a partir del día siguiente a la presentación de la solicitud.
3. Que excepcionalmente, el plazo referido en el párrafo anterior podrá ampliarse hasta por diez días más, **siempre y cuando existan razones fundadas y motivadas** las cuales deberán ser hechas del conocimiento de la UTAG y CT, y en caso de que del análisis previo resulte conveniente ampliar el término de las mismas por su naturaleza o



complejidad en la solicitud y búsqueda de información, solo en dichos casos, el Comité de Transparencia aprobará su ampliación.

4. Que todas las unidades administrativas **sin excepción alguna** en colaboración con los enlaces en materia de transparencia tendrán la obligación de detectar las solicitudes de **potencial riesgo y/o de atención prioritaria**; es decir, aquellas que por su naturaleza y alcance puedan generar un impacto mediático a la Institución, y de la información susceptible de ser pública, para que se analicen de ser el caso incluso con el apoyo de este Comité de Transparencia y se adopten las medidas que en su caso correspondan.
5. Que la Titular de la UTAG y Presidenta del CT, reportará un listado de las solicitudes en las cuales se amplíe el término para dar respuesta a la Oficina del Fiscal, y en caso de que del análisis a las mismas resulte alguna observación de carácter prioritario, se tomaran las medidas pertinentes con el Titular de la Unidad Administrativa responsable de la información solicitada, a efecto de gestionar las mismas con la respectiva cautela que permita emitir una respuesta transparente e institucional.
6. En los casos en los que se prorroguen solicitudes sin necesidad específica, se procederá a instar a los titulares de las unidades administrativas dueñas de la información, a efecto de que se realicen los trámites internos correspondientes para evitar la reincidencia en este tipo de situaciones.
7. Que de incumplir con el Acuerdo referido, de conformidad con el artículo 61, fracción XI de la LFTAIP, la Unidad de Transparencia podrá hacer del conocimiento a la instancia competente la probable responsabilidad por la inobservancia a las obligaciones previstas en la Ley que nos ocupa y en las demás disposiciones aplicables, al Órgano Interno de Control y a la Visitaduría General según corresponda para que se finquen responsabilidades a los servidores públicos que incumplan con el presente Acuerdo.
8. Que de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la LFTAIP, cuando alguna Área de los sujetos obligados se niegue a colaborar con la Unidad de Transparencia, ésta dará aviso al superior jerárquico de aquélla para que ordene al servidor público de que se trate, realizar sin demora las acciones conducentes, y que cuando persista la negativa de colaboración, la Unidad de Transparencia lo hará del conocimiento de la autoridad competente para que ésta inicie, en su caso, el procedimiento de responsabilidad administrativa respectivo.
9. Que cualquier duda o comentario respecto de las solicitudes de información podrá hacerlo del conocimiento a la Unidad de Transparencia y al Comité de Transparencia.



Se expide la presente resolución para los efectos a los que haya lugar, misma que forma parte del Acta de la Novena Sesión Ordinaria del año 2019 del Comité de Transparencia de la Fiscalía General de la República. Al efecto, se elabora acta por triplicado, firmando al calce los integrantes del Comité de Transparencia para constancia.

INTEGRANTES

Lcda. Adi Loza Barrera.

Titular de la Unidad de Transparencia y Apertura
Gubernamental y Presidenta del Comité de Transparencia.

Lic. Adriana Fabiola Rodríguez León

Suplente del Director General de Recursos
Materiales y Servicios Generales,
representante del área coordinadora de
archivos

Lic. Luis Grijalva Torrero.

Titular del Órgano Interno de Control

Lcda. Gabriela Santillán García.

Secretaría Técnica del Comité de Transparencia
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Elaboró

Lic. Miguel Ángel Cerón Cruz.

Director de Acceso a la Información
Unidad de Transparencia y Apertura Gubernamental
Vo. Bo.